**LA IDEA DEL ESTADO NACIONAL EN LA ETAPA DE LA REGENERACIÓN
CONSERVADORA, EN EL PENSAMIENTO DE MIGUEL ANTONIO CARO DE 1868-
1898**

NATALIA DÍAZ ORTIZ

Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Filosofía Latinoamericana

Universidad Santo Tomás

Facultad de Filosofía Y Letras

Maestría en Filosofía Latinoamericana

Bogotá D.C. 2015

**LA IDEA DEL ESTADO NACIONAL EN LA ETAPA DE LA REGENERACIÓN
CONSERVADORA, EN EL PENSAMIENTO DE MIGUEL ANTONIO CARO DE 1868-
1898**

NATALIA DÍAZ ORTIZ

Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Filosofía Latinoamericana

Magister en Historia

ALVARO ACEVEDO GUTIERREZ

Tutor

Universidad Santo Tomás

Facultad de Filosofía Y Letras

Maestría en Filosofía Latinoamericana

Bogotá D.C. 2015

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	4
Capítulo I	8
1.1 Planteamiento del problema	8
1.2 Justificación	10
1.3 Objetivos	12
1.3.1 Objetivo General	12
1.3.2 Objetivos Específicos	12
1.4 Metodología	13
Capitulo II	15
2 Contexto Histórico De Mitad Del Siglo XIX	15
2.1 El panorama latinoamericano de mitad del siglo XIX	15
2.2 El contexto colombiano de mitad de siglo XIX.....	22
Capitulo III.....	29
3 La Influencia Filosófica en la Construcción de los Estados Nacionales Latinoamericanos.....	29
3.1 La influencia positivista en América Latina.....	29
3.1.1 Las corrientes positivistas	33
3.2 La filosofía tradicionalista.....	39
3.2.1 La influencia tradicionalista: El partido Conservador colombiano del siglo XIX.....	40
3.2.2 Las corrientes tradicionalistas	45
Capitulo IV.....	52
4 La Identidad Como Horizonte de Los Estados Nacionales Latinoamericanos.....	52
Capítulo V	64
5 La Regeneración Y Miguel Antonio Caro	64
Conclusiones	96
Referencias Bibliográficas.....	105

Introducción

La búsqueda de identidad como referente del pasado, del presente y del futuro, se constituye en una tarea para los países emergentes en América Latina, su consolidación como naciones independientes desde el marco político recae en la necesidad de fundar Estados Nación que liguen a su población. Este proceso que inicia en las primeras décadas del siglo XIX, se convierte en el escenario de grandes conflictos entre dos modelos de interpretación del Estado Nación, por un lado, la identidad del mismo y, por otro, la comprensión de lo que eran o debían ser las sociedades. Estos dos modelos se estructuran gracias a la influencia del Positivismo-Utilitarismo y el Tradicionalismo.

Por una parte, el Positivismo-Utilitarismo con sus pilares: el orden y el progreso, tuvo acogida en el partido liberal. Por otro lado, el Tradicionalismo buscaba ligar a las naciones desde los principios emanados del cristianismo según las directrices de la Iglesia Católica, dirigiendo así al partido conservador.

En este sentido, Con la influencia de las ideas ilustradas, de la Revolución Francesa y el Positivismo, la corriente liberal lideró procesos de modernización y secularización en los países de América Latina bajo los conceptos de libertad, orden, justicia, igualdad y progreso. En el orden político, fueron proclives al federalismo y en el orden económico, la necesidad de abastecerse y sacar sus productos hacia otros países los orientó a favorecer el libre cambio. Estas ideas modernizantes se encontraron con las tensiones propias de países por consolidar que se enfrentaban a fuertes contradicciones entre los diferentes grupos sociales y entre la recepción o rechazo de planteamientos políticos y económicos según los ideales de Estado Nación presentes.

La corriente liberal se encontró con la resistencia de la segunda postura influyente en la época; siguiendo al Tradicionalismo español y francés se conforma el partido conservador, el

cual, aglutina a grupos sociales que pretendían, por un lado, mantener los privilegios o las estructuras predominantes en la colonia y por otro lado, mantener las tradiciones resultantes de los principios católicos como forma de cohesión social teniendo como fundamento la idea de justicia y de moralización de la población.

Estos planteamientos ideológicos se hicieron cada vez más opuestos en la lucha por controlar el aparato estatal, el educativo y el económico; tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos, la confrontación entre los dos ideales de sociedad desembocó en diferentes guerras civiles que dirimieron momentáneamente las disputas bajo la exclusión de los planteamientos del partido político vencido. En Colombia, el enfrentamiento entre los proyectos liberales y conservadores dio lugar a dos periodos de gran importancia en la historia del siglo XIX; el primero, denominado el periodo del Radicalismo Liberal y el segundo conocido como la Regeneración Conservadora; cada uno con una propuesta de sociedad diferente.

La Regeneración Conservadora emerge y se fortalece en el deterioro del régimen liberal anterior; en el Radicalismo Liberal surgen problemas de inestabilidad regional, se denuncian fraudes electorales, se persigue a la Iglesia, hay fragmentación administrativa y una crisis económica provocada por la disminución en la exportación de productos como la quina. Así y en el marco de la confrontación no solo ideológica sino también armada, los conservadores liderados por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro imponen su régimen; acontecimiento en el que Caro fue guiado por los principios del Tradicionalismo ultramontano.

Las críticas de los regeneradores hacia los radicales se fundamentan en la desunión o como la llaman, la anarquía, obtenida como producto de la división federal y la falta de unión moral a consecuencia de la influencia del Utilitarismo, por lo cual, el principal objetivo de la

Regeneración va a ser darle unidad al Estado Nación colombiano y de esta manera develar su fundamento, su identidad y los lazos que cohesionen a la población en un proyecto común.

Si bien este periodo histórico es fuertemente criticado, se debe reconocer que de allí surgió una estructura política orientada por M. Caro, que se mantuvo por más de un siglo, por tal razón, es imprescindible entender su fundamento, sus características, sus implicaciones políticas y sus efectos en los procesos sociales de finales del siglo XIX.

En este contexto se hace necesario dilucidar cuál es la idea de Estado Nación en el pensamiento de Miguel Antonio Caro, expuesta previamente a la Regeneración Conservadora y aplicada durante este periodo, de esta manera, en este trabajo se estudian los planteamientos políticos de este pensador respecto a las características de este concepto y, en este sentido, de las características particulares de la nación colombiana de finales del Siglo XIX, para analizar su alcance como proyecto político común de la población colombiana.

Así es como a partir del segundo capítulo se aborda el contexto histórico de finales del siglo XIX donde se abordan las tendencias políticas y hechos históricos en los países latinoamericanos en los que se expresan idearios de nación en relación con los propios procesos históricos y los cuerpos teóricos provenientes de naciones más antiguas.

En el tercer capítulo, se retoma el Positivismo y el Tradicionalismo como elementos filosóficos de mayor influencia en los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, para lo cual se referencian autores influyentes del partido liberal como Augusto Comte, Herbert Spencer y Jhon Stuart Mill y del partido conservador a Jaime Luciano Balmes, Joseph De Maistre y Louis De Bonald. Los planteamientos de estos pensadores combinándose con las características propias de estos países fundamentan el ideal de nación en las repúblicas emergentes.

En el cuarto capítulo se encuentran diferentes perspectivas de análisis de la identidad nacional en la construcción de los Estados latinoamericanos, en las que se retoman diversos componentes como el proceso histórico, el desarrollo económico, las características culturales, las tensiones entre los grupos sociales, la estructuración simbólica, entre otras, que brindan un horizonte de estudio de los procesos o ideas de construcción de identidad nacional en la estructuración de los Estados Nacionales de América Latina o para este caso, de Colombia a finales del siglo XIX.

En el quinto y último capítulo se presentan las características generales del periodo de la Regeneración Conservadora, los planteamientos sobre los principios e ideales sobre Estado nación en el pensamiento político de Miguel Antonio Caro, el cuestionamiento que hace a la realidad de la nación colombiana de su época y la implementación que hace de estos principios a finales del siglo XIX como hombre de gobierno en aras de validar sus alcances en la construcción de un proyecto político común colombiano.

Capítulo I

1.1 Planteamiento del problema

La estructuración de los Estados Nacionales, no es unívoca en su planteamiento teórico ni en sus ejemplos prácticos, las diversas perspectivas de estudio y los diferentes caminos que toman las naciones para consolidarse brindan un horizonte amplio para el análisis de la propuesta de construcción del Estado nacional colombiano en las ideas políticas de Miguel Antonio Caro durante el periodo de la Regeneración Conservadora.

La conformación del Estado-Nación en Colombia, se enmarca en contradicciones irresueltas desde lo puramente geográfico hasta la composición social, la estructura económica y el pensamiento político que fragmenta a la población y cuestiona la construcción de identidad nacional como un proyecto en el que toda la población se sienta convocada.

Sin embargo, a finales del siglo XIX en el periodo de la Regeneración Conservadora se plantea un proyecto de ideación de Estado Nación en el marco de la unidad territorial, administrativa y moral. En la propuesta de Miguel Antonio Caro, la construcción de una nación supone un esfuerzo común en el marco de un legado histórico que no se corta con el proceso de independencia, este legado es la tradición religiosa en manos de la Iglesia Católica de la que emerge la unión de la población, su carácter, su proyecto futuro y, en este sentido, una estructuración política que se sitúa en un momento anterior a la teoría política y hasta al ser político mismo. La estructura del Estado Nación colombiano emergió en el periodo de la Regeneración Conservadora plasmado en la Constitución de 1886 ideada por Miguel Antonio Caro; esta sembró los pilares del Estado centralista que ha perdurado por más de un siglo, pero

que en su momento no dirimió ni ha dirimido los conflictos bajo un proyecto común que convoque a su población.

De esta manera, la pregunta problema que orienta este trabajo es: ¿cuál es la idea de Estado nacional presente en el pensamiento político de Miguel Antonio Caro en la etapa de la Regeneración Conservadora, y cómo influye dicho pensamiento en el fortalecimiento de una identidad común o una conciencia de nación colombiana? Así, este trabajo sostiene que la idea de Estado Nación de Miguel Antonio Caro orientó la estructuración socio política de la República de Colombia y que sus planteamientos encontraron su límite y sus posibilidades en la confrontación política entre los liberales y los conservadores.

Si bien este periodo histórico ha sido cuestionado como excluyente y coercitivo, es necesario resignificarlo a partir de los aportes que se desarrollaron en materia de la construcción del Estado Nación colombiano y en los aportes a la filosofía política de la época. Para tal efecto, se tiene en cuenta las corrientes filosóficas más influyentes en el siglo XIX, las dinámicas políticas en el marco de la lucha bipartidista, algunos hechos representativos de la época, los pensamientos políticos publicados por Miguel Antonio Caro y su ejercicio político como vicepresidente y presidente de Colombia.

1.2 Justificación

La construcción del Estado Nacional colombiano se ha enmarcado en diferentes contradicciones que han llevado a dificultar la construcción de la identidad nacional necesaria para ligar los diferentes intereses y grupos que hacen parte del territorio colombiano y ser el lugar desde el cual se proyecte el Estado- nación en lo político, económico y cultural.

Las dificultades geográficas han permeado la unidad nacional haciendo de Colombia un país que reconoce diferentes regiones o responde a identidades regionales y locales que se excluyen entre sí y en las que el Estado central no tiene una presencia total como ocurre en la costa occidental y el sur oriente del país.

Las confrontaciones políticas, inicialmente por la configuración de un estado centralista o federalista, sumadas a las disputas por mantener la unión entre la Iglesia y el Estado o la secularización de éste, la permanencia en el poder de uno u otro partido, la inclusión de terceras fuerzas políticas emergentes en este proceso, el descontento de grandes sectores de la población que no se sienten representados ni acogidos por las propuestas políticas, llevó a diferentes brotes de violencia, guerras civiles, al establecimiento de grupos guerrilleros y a la estructuración de un Estado débil que no tiene el monopolio de fuerza ni cobertura en todo el territorio y, por ende, no es reconocido como legítimo por algunos sectores de la población.

El modelo económico ha atravesado diferentes intentos de distribución de tierras y reformas agrarias que no han reflejado equidad ante la población y si han generado la concentración de la riqueza y el descontento de la población sin acceso a tierras o sistemas de producción que les procuren estabilidad económica.

La diversidad sociocultural también juega un papel importante en la construcción nacional, Colombia es un país que cuenta principalmente con grupos étnicos afrocolombianos,

indígenas y un bajo porcentaje de población Rom, grupos que han sido invisibilizados históricamente y que reclaman su autonomía y el respeto de sus territorios.

En un país con tantas contradicciones irresueltas que han desembocado en violencia permanente, se hace necesario pensar en la importancia de analizar un proyecto político que intentó ligar a la población colombiana en el periodo de la Regeneración Conservadora y desde el cual se generó un marco legal que rigió a Colombia por más de un siglo, en este sentido, es importante dilucidar cuáles fueron sus propuestas, sus contradicciones, aportes a la ideación nacional colombiana desde la filosofía política, la unión religiosa ligada a la tradición conservadora y al Tradicionalismo español y francés.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Analizar la idea de Estado nacional en la etapa de la Regeneración conservadora, desde el pensamiento de Miguel Antonio Caro para dilucidar la construcción de un proyecto político común colombiano.

1.3.2 Objetivos Específicos

Determinar los aportes de la filosofía política en el periodo de la Regeneración conservadora en Colombia.

Determinar las características del proyecto de Estado nacional en el pensamiento de Miguel Antonio Caro.

Establecer la influencia de la propuesta de Estado nacional de Miguel Antonio Caro, en el contexto colombiano de la época.

1.4 Metodología

Para entender el significado de la idea del Estado nacional en la etapa de la Regeneración Conservadora, en el pensamiento de Miguel Antonio Caro, se realizó un estudio en el marco de la historia de las ideas, entendida esta “como aquella parte de la Historia que pone en primer término las ideas y en otros términos todas las circunstancias de estas, para explicar o comprender las ideas por las circunstancias” (Gaos, p. 71), en este sentido, se piensa la idea o el discurso como un contenido semántico en relación con el sujeto que lo formula y a un contexto o circunstancias donde emerge, por lo tanto, se realizó una revisión de la estructuración de los Estados nacionales latinoamericanos en el siglo XIX y específicamente de las circunstancias presentes en Colombia, así, el estudio del significado de las ideas políticas de Miguel Antonio Caro se acompaña de una reconstrucción historiográfica, de tal manera que se puedan comprender sus discursos y al pensador a través de su razón histórica como lo propone Roig (1993), ya que “toda idea está adscrita irremediabilmente a la situación o circunstancia frente a la cual representa su activo papel y ejercita su función” (Gaos, 1980, p. 20).

El discurso político de Miguel Antonio Caro se sitúa en el marco de la confrontación bipartidista, por lo cual se exponen las doctrinas que influyen el pensamiento filosófico político de la época; el Positivismo- Utilitarismo y el Tradicionalismo, para entender la orientación en la concepción de Estado y de nación de los partidos políticos Liberal y Conservador. En razón de que cada idea se da en respuesta a ciertos contextos y discursos y que desde allí emergen su interés axiológico y su función social (Roig, 1993), el discurso de M. Caro se entiende no solo como el planteamiento de un ideal de sociedad fundamentado en el Tradicionalismo, sino como la respuesta a un contexto específico y a los ataques liberales de la época que propagaban el Positivismo-utilitarismo, por lo cual, se confrontan los postulados de

las dos doctrinas filosóficas y los planteamientos de los partidos respecto al ideal de Estado y de nación.

Así, siguiendo a Roig se estudian las ideas políticas de M. Caro dentro de la dualidad del universo discursivo, dicho “dualismo aparece en el nivel de la textualidad y es una consecuencia de la realidad conflictiva social que se expresa en lo que podríamos considerar nivel profundo discursivo” (Roig, 1993, p. 110), de esta manera, se toma como discurso contrario al de M. Caro el proveniente del liberalismo y los procesos sociopolíticos de la época para analizar el hecho dialéctico que se presenta en su interacción. Así, se hace un examen del impacto de las ideas políticas de M. Caro en la estructuración de la Constitución de 1886, en su periodo de gobierno como vicepresidente y presidente de la República de Colombia, teniendo en cuenta la aplicación de sus ideas políticas y las críticas que recibió desde los discursos contrarios.

Finalmente, es importante señalar que esta investigación contempla el rango de tiempo entre 1868 y 1898 y recurre a las publicaciones realizadas por este pensador como periodista y como hombre de gobierno en diferentes periódicos de la época como El Tradicionalista, La Opinión, El Correo Nacional, Diario Oficial, El Telegrama, El Nacional. También se estudian algunos discursos dirigidos al Congreso de la República y tres obras que permiten ahondar en el pensamiento político de este intelectual: Estudio sobre el Utilitarismo, Obras selectas y Estudio Constitucional.

Capítulo II

2 Contexto Histórico De Mitad Del Siglo XIX

2.1 El panorama latinoamericano de mitad del siglo XIX

Al culminar los procesos de independencia en las primeras décadas del siglo XIX, los países latinoamericanos se enfrentaron a la difícil tarea de consolidar los Estados- Nacionales, para lo cual, se hizo menester crear criterios que permitieran mantener unidas, dentro de un mismo territorio, a poblaciones con cosmovisiones y posiciones dentro de la estructura de poder disímiles. Así, avanzada la primera mitad del siglo se estructuraron dos partidos políticos: el liberal y el conservador, cuyas ideas van a estar en constante disputa a lo largo del siglo para caracterizar y organizar las naciones según su ideal de sociedad por medio de los proyectos políticos pertinentes a los determinados ideales.

Los programas de los partidos políticos se diferenciaban en varios puntos que los enfrentaron de manera constante, entre los que se destacaron: la forma de gobierno que se debatía entre el federalismo y el centralismo, la posición frente a los privilegios provenientes de la colonia, el librecomercio y el proteccionismo, la relación entre política y religión y las directrices de la educación.

Provenientes de Europa y de Estados Unidos, el ideario de la Ilustración y la Revolución Francesa, inspiraron a las nuevas Repúblicas fundamentadas y legitimadas como indica Chevalier, (1979), en la voluntad general y la soberanía del pueblo bajo las ideas de libertad, igualdad de los ciudadanos, derechos individuales y defensa de la patria, que como propuesta teórica alentó las independencias y el surgimiento de las repúblicas latinoamericanas,

pero en la práctica, al ser contrarrestadas con las sociedades rurales y analfabetas se quedaban más en ideas que en las realidades, los proyectos nacionales tuvieron que

Combatir el clero, a la aristocracia feudal y esclavista, promover la acumulación del capital comercial y nuevas formas de propiedad agraria, demoler reducciones, resguardos, amortizaciones, aduanas interregionales, mayorazgos y alcabalas, tales eran las tareas de las clases que simultáneamente se empeñaban en afirmar y reorganizar diferentes Estados Nacionales hispanoamericano (Soler, 1978, p. 24).

Las ideas liberales orientaron procesos de modernización y de separación de la Iglesia y del Estado, se llevó a cabo la desamortización de los bienes de la Iglesia, la eliminación de sus fueros y se implantó la enseñanza laica para formar una ciudadanía que sustentara las nacientes repúblicas; esto bajo los conceptos de soberanía, democracia, república, igualdad, patria, deberes y derechos ciudadanos. Dentro de este marco, también se originaron sociedades democráticas organizadas de forma igualitaria, voluntaria y contractual; eran sociedades telúricas, clubes, logias, élites orientadas al aprendizaje, al saber, a la trasmisión de las ideas; provocando por esto, la reacción de la Iglesia y de los conservadores, por lo cual, en diferentes oportunidades, estas fueron perseguidas o clausuradas (Chevalier, 1979).

Esta corriente de pensamiento, albergó el Positivismo-Utilitarismo como fundamento filosófico-político, haciéndose evidente en personajes como Alberdi, Sarmiento, Andrés Bello (Sur América), Cecilio del Valle (Centro América), Barrera y Mora (México), que como intelectuales y políticos, en sus planteamientos destacan la búsqueda de un hombre positivo, un individuo industrioso e ilustrado que fuera un virtuoso ciudadano.

La implementación del liberalismo en los países latinoamericanos no se dio de forma plena debido a las características de la población y a las antiguas estructuras, que aún perduraban en las prácticas a causa de la escasa alfabetización, por tanto, el proyecto liberal era hacia el futuro, al no contar con las condiciones para su ejecución, lo que llevó a que implementaran prácticas políticas fuera de los principios de libertad e igualdad para mantener el poder. Así es como se presentan gobiernos fuertes, militares y hasta dictaduras como la del general Guzmán Blanco en Venezuela, quien implanta una dictadura positivista en la que se resalta el interés de educar a los nuevos ciudadanos, patrocina el Instituto de Ciencias Sociales, la cátedra de Historia Mundial en la Universidad de Caracas y la Sociedad de Amigos del Saber (Chevalier, 1979, p. 389). En diferentes países latinoamericanos, los partidos liberales recurrieron a la fuerza para mantener sus propuestas y el voto, que en teoría era universal, cobijó generalmente a los varones propietarios o alfabetizados.

La segunda mitad del siglo XIX latinoamericano, se enmarcó dentro de los procesos de secularización, como lo ejemplifica México con Benito Juárez y la Constitución de 1853 y Argentina con la dictadura del general Juan Manuel de Rosas, quien en 1837 prohibió el cumplimiento de los decretos del Vaticano. Estas políticas fueron seguidas y refrendadas en 1912 y en los gobiernos de Julio Roca y Miguel Suárez Celma a finales del siglo XIX.

En Venezuela se dan 67 años (1868 a 1935) de caudillos liberales que separan la Iglesia del Estado; en Ecuador, la ola secularizante está representada con Eloy Alfaro, un revolucionario modernizante y con el escritor Juan Montalvo (1832-1889); en Chile, las Repúblicas Liberales con reformas secularizantes se personifican con Domingo Santamaría y en los países centroamericanos, este proceso es dirigido en Costa Rica por Tomas Guardia, en Guatemala por Justo Rufino Barrios y en Honduras por Marco Aurelio Soto.

En Panamá, Justo Arosemena, bajo la influencia de Jeremías Bentham, B. Constant, Detutt de Tracy, representantes del materialismo ilustrado francés y el evolucionismo del Positivismo Inglés, basa su pensamiento político en el principio de que toda ciencia debe partir de la inducción, de los hechos de la existencia, de donde se descubren también las ciencias morales y políticas. Además, luchó en contra del teocentrismo ultramontano y del Tradicionalismo reaccionario (Soler, 1978).

Al igual que varios liberales de la época, Arosemena defendió el federalismo, para lo que expresa que “el municipio es la verdadera sociedad: la nación no es sino una pura idealidad, una abstracción a la cual no deben subordinarse los intereses de la ciudad o del común” (Soler, 1978, p.63). La nacionalidad solo estará fundada para este pensador en los lazos morales de religión, idioma, hábitos y virtudes bajo un gobierno común; sin este último, la nacionalidad política sería inexistente.

La implementación de los proyectos políticos se dio en medio de luchas por el poder, en México, por ejemplo, de 1833 a 1834, como presidente Gómez implanta un programa liberal en el que se establece el federalismo, se eliminan los fueros del antiguo régimen y se establece la educación laica; hasta que en 1834, el general Santa Anna da un golpe de Estado e implanta una dictadura conservadora y centralista pero es derrocado en 1854 por un exmilitante de la independencia; es entonces, cuando se diseña la Constitución de 1857, en la que se prohíben los votos religiosos, se nacionalizan los bienes de la Iglesia y de los indígenas, los conservadores fuera del poder se piden ayuda a Francia y se impone como emperador Maximiliano de Austria, quien permanece en el poder hasta que es fusilado por Benito Juárez en 1867, acto que se constituye como una victoria liberal donde se hace una separación definitiva entre la Iglesia y el

Estado. Posterior a la muerte de Juárez, asume el gobierno Lerdo Tejada, hasta que en 1876 llega al poder Porfirio Díaz, quien es reelegido hasta 1910.

En ausencia de relaciones capitalistas, los liberales necesitaron erigir instituciones propias de un Estado capitalista tomando medidas como el mantenimiento de la educación pública y la abolición de la esclavitud; aspectos que se suscitaron bajo los preceptos de igualdad jurídica burguesa, del atomismo social y del liberalismo individualista, con los que se buscaba un ser americano o un no deber ser europeo (Soler, 1978). De esta manera, el liberalismo estuvo presente en el surgimiento de las repúblicas latinoamericanas intentando civilizar, modernizar, llevar el progreso a cada nación y, en cada una de ellas se encontró con contextos desprovistos (unos más que otros) de los elementos bases para su proyecto.

Esto convirtió en sueño la aspiración de algunos teóricos liberales de universalizar la pequeña propiedad agraria [...] la burguesía comercial librecambista logró avances expandiendo la red de distribución y circulación de mercancías. Pero quedó irremisiblemente prisionera de la producción extranjera (Soler, 1978, p. 38)

La sociedad continuaba estando jerarquizada, constituida en su mayoría por población rural y analfabeta, se necesitaban más y mejores vías y medios de comunicación, por lo cual, el ideal de una república libre, igualitaria, fundamentada en la soberanía del pueblo, se convirtió en autoritaria y frágil en el presente, pero con la promesa del futuro para mantener el régimen. Como expresa Soler el proyecto nacional “sobrepasa las posibilidades reales ofrecidas por una economía subdesarrollada. El fortalecimiento del aparato estatal se convierte así en el instrumento inmediato de la afirmación nacional” (Soler, 1978, p. 76).

Por su lado, el conservadurismo en América Latina, expone Chevalier (1979), no se apoya en un sistema de pensamiento estructurado, tardía e imperfectamente se constituye como partido político. Luego de la independencia pierden legitimidad, ya que, se apoyan en la institución que representa el orden de la vieja sociedad jerárquica, la Iglesia, e intentan reivindicar los privilegios políticos y sociales propios del sistema colonial. El pensamiento político conservador pretendía mantener la propiedad amortizada y vinculada (esclava, servil o semiservil), mantener el fuero eclesiástico, militar y las aduanas interiores (Soler, 1978)

Así, el conservadurismo se da en el siglo XIX como una continuidad de una legitimidad del sistema monárquico (Chevalier, 1979), su fundamento filosófico proviene de España a través del pensamiento filosófico de Bonald, De Maistre y Balmes que hacen una fuerte crítica del ideario y desarrollo de la Revolución Francesa.

Lucas Alamán, uno de los representantes del conservadurismo en México, funda el partido conservador en 1849, consideró que América debía dividirse en tres Estados, cada uno con su Corte y el poder ejecutivo debía ser escogido por el Rey. Para Alamán, después de la independencia, la nación mexicana debía continuar con las raíces espirituales asentadas en su historia colonial, sus postulados se encuentran dentro de un planteamiento monárquico constitucional como indica Soler, para él “conservar la tradición y la preminencia social de las clases que la sustentan será consecuentemente el *leitmotiu* de la actividad y pensamiento políticos” (Soler, 1978, p. 45). Como la mayoría de los conservadores, su planteamiento económico va a ser proteccionista, propone conservar la economía mercantilista bajo la forma de proteccionismo nacionalista para evitar caer en la dependencia de lo que es indispensable.

Bajo la influencia de Edmundo Burke, Alamán sitúa la instrucción religiosa como base de toda la realidad y cuestiona los avances de la Revolución Francesa al pretender destruir la significación política de las clases portadoras del espíritu tradicionalista (Soler, 1978).

En Ecuador, García Moreno influenciado por Bonald y Joseph de Maistre gobernó desde una visión católica; pensaba que el Estado era el medio para civilizar y que la educación debía llegar a las masas para integrarlas al conjunto nacional, la Iglesia fue un instrumento administrativo y marco para el Estado; reformó los conventos, firmó un concordato con el que trajo sacerdotes europeos, alineó al país en las disposiciones adoptadas por Pío IX, quien sostenía que la razón humana conoce la verdad porque las verdades fundamentales se cimientan en la fe, en la revelación fundamental expresada en las instituciones y la Constitución de un Estado debe apoyarse en el progreso del país (Chevalier, 1979).

La crítica que recibe el proyecto político conservador consiste en que su verdadero empeño no era conservar sino regresar a la colonia; además, que “el proyecto nacional y nacional hispanoamericano del conservatismo, era históricamente ilegítimo” (Soler, 1978, p. 53), ya que, había una imposible conciliación entre el feudalismo y el capitalismo emergente.

En la segunda mitad del siglo comienza una búsqueda de instituciones que fueran más acordes a las realidades de las naciones; entre 1850 y 1880, las naciones definieron formalmente su organización institucional con formas más estables, centradas en procesos de modernización y cierta apertura comercial hacia Europa; la élite intelectual fue madurando ideologías coherentes con la realidad, sobretudo del liberalismo que se apoyó en los hacendados, ricos, comerciantes y letrados (Oddonne, p. 210).

Ahora bien, como llama la atención Oddonne, en la implementación de los proyectos políticos existía una verdadera obsesión constitucional en la que se sustentaba la creencia de que

toda la vida de los nuevos Estados podría ser encausada mediante un cuerpo escrito; cada idea de lo nacional recurrió a la creación de una constitución que la legalizara.

Junto a esta creencia justificada en la necesidad de afirmar y evidenciar la existencia de las naciones, surgen también diferentes corrientes que desde las artes, la literatura y la historia reivindicaban la naturaleza, el mestizo, el indígena, la búsqueda de los orígenes nacionales, lo propio de cada una de las nuevas repúblicas como resultado de la búsqueda de su identidad y estructuración propia.

2.2 El contexto colombiano de mitad de siglo XIX

En la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, así como en los demás países latinoamericanos, liberales y conservadores, se disputaban la organización de la república. En Colombia se dieron dos direcciones importantes, una la de los Radicales Liberales y otra la de la Regeneración conservadora; las ideas radicales se consolidaron en la constitución de Rionegro de 1863. El sistema Federal, inspirado en la constitución de los Estados Unidos dio las pautas para el ordenamiento de la nueva república y los regeneradores plasmaron su proyecto en la Constitución de 1886 centralizadora y reparadora de los vínculos con la Iglesia.

La Constitución de 1863 se fundamentó en el pueblo y en los Estados Soberanos, se debilitó el gobierno central, cada estado legislaba y se gobernaba a sí mismo, tomó preponderancia el poder legislativo, desde donde se hacían las leyes y se nombraban los funcionarios públicos, se teorizaron los derechos individuales, en los cuales, también se dio la libertad de negociar armas, se proclamó la libertad de cultos y de expresión. Este periodo estuvo marcado por un fuerte anticlericalismo en el que se debilitó a la Iglesia por medio de la división política del Estado y la

Iglesia, la tuición de cultos, la desamortización de bienes de manos muertas y la secularización de la educación (Cruz, 2011).

El radicalismo liberal necesitaba un tipo determinado de ciudadano que cimentara su República; virtuoso pero diferente del ideal conservador, en este sentido, un ciudadano ilustrado, consciente de sus derechos y sus deberes que pueda participar en las instituciones de la República; no obstante, la población de la época no tenía esta formación, por lo cual, era necesario educarla y progresivamente aumentar su grado de participación (Cruz, 2011).

El proyecto liberal fue un proyecto de carácter nacional que buscaba “expresar su mundo, sin estar pendientes de lo europeísta o de lo hispano” (Morales, 1989, p. 161). Como fundamento de la búsqueda de la realidad del país, se erigió a la democracia como el bastión nacional, en principio como un cambio de conducta en los hábitos políticos de la comunidad y por medio del sufragio como forma de participación. Así, Morales expresa que:

(...) los radicales liberales obraron con sentido nacional. Su orientación quería ratificar los auténticos valores de la patria. Ellos dijeron para qué servía el Estado y cuáles eran sus deberes. A través de las leyes le impusieron sus principios doctrinarios. Se movieron haciendo entender cómo era la interrelación de la economía interna con los que dominaba en los precios externos. Se empeñaron en acabar con los privilegios y los prejuicios. Avanzaron en una batalla singularísima, espectacular contra los sectores más poderosos de su tiempo (Morales, 1989, p. 176)

En este sentido, cada proyecto político, sin ser excepción el liberal, buscó formar la identidad del país en el marco del fortalecimiento de los principios de un Estado republicano con idiosincrasias propias en lo político, lo social, lo cultural y lo económico, con miras a ubicar al

país en la modernización, para lo cual, tuvo en cuenta tres pilares; el primero, las reformas económicas; el segundo, garantizar las libertades públicas y el tercero, respetar y exaltar los fueros políticos. El proyecto modernizador se centró en la construcción de vías, que por un lado unieran al país, pero que fundamentalmente favorecieran la economía a través del transporte de los productos. La educación fue otro pilar modernizador, debía ser laica, obligatoria, con carreras científicas y especialidades que incrementaran las posibilidades económicas (Morales, 1989).

En aras de la democratización, liberales como Murillo Toro plantearon una distribución de las tierras de forma más equitativa; teniendo como criterio de distribución el trabajo, proclamó que se debía poseer solo lo “que fuese indispensable para subsistir y con un límite de mil hectáreas” (Morales, 1989, p. 168), en contraposición a los derechos que estaban vigentes desde la colonia justificados en la permanencia en el tiempo y el designo divino.

En términos de modernización y progreso, hay influencia del Positivismo y la Ilustración en las prácticas políticas liberales, lo que Morales expresa diciendo que para él:

(...) la política se adelantará obedeciendo a principios científicos y que el Estado cumpliera una función interventora. En este caso su ímpetu debía concentrarse en hacer fomento económico. El progreso lo aceptaban como parte fundamental de la tarea del Estado. Todo lo unían a la necesidad vial del país (Morales, 1989, p. 172)

Las ideas de modernización y progreso se centraron en negar o remplazar el legado colonial que era reprochado por la concentración de las riquezas y del poder en estructuras obsoletas que obstaculizaban el alcance de la modernización y el progreso. Juan Manuel Restrepo expresa que “es doloroso tener que olvidar la mayor parte de lo que aprendimos en la educación

colonial... Y estudiar de nuevo. Pero es necesario para colocarnos a la par de la ilustración del siglo” (Morales, 1989, p.172).

Los principios y reformas liberales causaron controversia, no solo con sus opositores o a quienes los cambios económicos y políticos afectaban, sino también dentro del liberalismo; dificultando así la puesta en marcha de sus políticas que, además se veían contrapuestas con el contexto de atraso del país. No obstante estos obstáculos, los liberales proclamaban en su discurso la necesidad de implementar su proyecto como camino del progreso; al partido liberal como el actor histórico, ejecutor de dicho fin y como opositor del partido conservador, representante del legado colonial.

La Constitución de 1863 “estableció una relativa estabilidad. El golpe de estado de 1867 contra Mosquera y numerosos locales no alcanzaron a desestabilizar el Régimen” (Cruz, 2011, p.91), pero para 1874, el partido liberal ya se encontraba dividido, se evidenciaba una fracción independiente que llegó a fundar periódicos de oposición, por lo cual algunos de sus redactores fueron aprisionados (Nieto, 2011). Ya en la primera candidatura de Rafael Núñez, se agrupan los disidentes del liberalismo afirmando apoyos transregionales.

En 1875, en la capital del país y en otras poblaciones, se hacen fusilar los electores y se busca derrocar el gobierno de Panamá por haber dado el voto a Núñez y se declara nulo el voto del Estado del Cauca; ya que ninguno de los candidatos tenía la mayoría requerida, así es como queda elegido Aquileo Parra en el periodo de 1876 a 1878 (Nieto, 2011).

De esta manera, entre 1876 a 1877, se desarrolla la denominada Guerra de Las Escuelas, donde se enfrentan Aquileo Parra, que representa la continuidad radical y Núñez quien agrupa a los sectores inconformes del liberalismo, al mosquerismo y algunos conservadores. El eje de la disputa es la enseñanza, se busca el control estatal de ésta y su carácter facultativo en las escuelas

oficiales; debido a la connotación religiosa, se reunificaron los mosqueristas, los radicales y los independientes, quienes ganaron militarmente la contienda.

En el gobierno del general Julián Trujillo (1878-1880), con el apoyo de los independientes, se busca darle presencia al Estado Federal en las regiones mediante la ejecución de obras, el saneamiento de finanzas gubernamentales, la derogación de las leyes de tuición y la expulsión de los obispos. El federalismo continuó vigente en el país, pero los independientes empiezan a estructurar una coalición en la que se proyecta una política gubernamental, se socializan propuestas de reforma constitucional en el marco de una tolerancia partidista, lo que da paso a la estructuración de un proyecto político (Múnera, 2011). En el año 1879 solo Antioquia y Tolima son radicales, en los demás estados triunfaron los independientes que, continúan ligados a la constitución de Rionegro; no obstante, el Estado central tiene intervención en condiciones de crisis, desorden en la sociedad para implantar el orden público y hacer viable el libre cambio mediante sus regulaciones.

En la primera presidencia de Núñez, se esboza la tendencia centralizadora con el Estatuto Político de los Estados Soberanos, pero aun en éste se mantienen las Instituciones del régimen federal. Núñez da inicio a la revisión de las relaciones con la Iglesia y además considera que uno de los problemas que afecta la política colombiana es el irrespeto a las minorías conservadoras, para lo que propone la *Paz Científica* que consiste en el respeto a la voluntad expresada en las urnas; en este sentido, plantea que la Corte Suprema juzgue los abusos de autoridad violatorios de los derechos individuales y con la Ley 17 de 1880, ley del Orden Publico Solidario, se buscó intervención para apoyar a los gobiernos legítimos según los resultados de la voluntad de los votantes.

Los independientes y liberales se asocian alrededor de Francisco Javier Martínez de Zaldúa quien gobernó por 8 meses (1882) para frenar el avance de Rafael Núñez, para en el gobierno de José Eusebio Otálora Martínez (1882-1884), darse un momento de resurgimiento el radicalismo liberal.

En 1886, en el marco de una nueva guerra civil se enfrentan los liberales y los conservadores bajo consignas como: viva la religión, se critica el periodo liberal representado en la Constitución de Rionegro por la gran cantidad de revueltas provinciales, lo que proyectaba la gran división de las regiones. En éste periodo solo se dio una guerra nacional de 1875 a 1876, la crisis económica de los últimos años alimentaron el enfrentamiento, las exportaciones bajaron 29.9 millones US en 1875 a 7.3 millones US en 1885, de 1879 a 1881 el precio de la quina baja un 80%, hay déficit fiscal, hay altas tasas de interés, las tierras de la Iglesia y resguardos indígenas ya se habían repartido y las tierras baldías ya estaban ocupadas (Tirado, 1997), situación que desembocó en un descontento popular que permitió el ascenso de Rafael Núñez y su proyecto regenerador.

En el segundo gobierno de Rafael Núñez convoca al comité de expresidentes liberales para hacer cambios constitucionales por medio de un gabinete ministerial amplio en el que participaron también conservadores. Núñez propone la centralización más allá de la Ley de 1880, la ampliación del tiempo del gobierno del Presidente de la Unión, de los Presidentes de los Estados, senadores, representantes y diputados; la unificación de la legislación civil, comercial y penal y el mejoramiento de los problemas con el Vaticano.

En este sentido, el proyecto de la Regeneración Conservadora se justifica en el deterioro del régimen anterior liderado por los radicales liberales, la crítica que se despliega sobre éste periodo de la historia posibilita el ascenso conservador que se sustenta en los problemas de

inestabilidad regional, los fraudes electorales, la persecución a la Iglesia, la fragmentación administrativa y la necesidad de proteger la economía nacional para aumentar los ingresos fiscales.

Capítulo III

3 La Influencia Filosófica en la Construcción de los Estados Nacionales Latinoamericanos

La fundamentación filosófica del Estado-nación en el pensamiento de Miguel Antonio Caro, se desarrolla dentro del legado político de José Eusebio Caro y la confrontación política entre los liberales y los conservadores bajo los principios del Positivismo-Utilitarismo y el Tradicionalismo ultramontano, respectivamente.

3.1 La influencia positivista en América Latina

La filosofía positivista fue la corriente de pensamiento más influyente desde mediados del siglo XIX en América latina, afectó las ciencias, la educación, lo jurídico, el arte y lo religioso, enfrentando los rezagos de la escolástica y las nuevas formas de idealismo (Guadarrama, 2003). La incorporación de las corrientes positivistas, según Guadarrama, no se fue un calco idéntico, sino se implementó mediante la incorporación de elementos auténticos, planteándose como una filosofía optimista, llena de confianza en el hombre, en su capacidad creativa, en progreso de la cultura, la ciencia y la industria fuertemente ligada al liberalismo económico y a la democracia desde la perspectiva de la política liberal. Así, el Positivismo cumplió una función progresista en América latina que:

(...) no significó una simple adaptación de una filosofía europea a estas latitudes, sino una incorporación y recepción creadora con profundos elementos originales, disimiles y renovadores, que constituyeron una forma específica de superación de dicha filosofía en el ámbito particular de este

continente, como expresión concreta del desarrollo entre la lucha entre el materialismo y el idealismo filosófico (Guadarrama, 2004, p. 217)

Su acogida dentro de la filosofía se basó en el fundamento metodológico y de concepción general del mundo y con el desarrollo de las ciencias particulares emergieron más elementos materialistas que produjeron mayor confianza en el poder de la educación, la ciencia y la tecnología; no obstante, no contó inicialmente con un buen instrumental lógico y epistemológico, éste solo consiguió hasta el siglo XX con el positivismo lógico y la filosofía analítica (Guadarrama, 2003).

Metodológicamente aportó el rigor filosófico, la insistencia en la verificación, busca los hechos en lo vivido como colectividades e individuos buscando las evidencias socio-históricas de su verdad y promueve escatológicamente el progreso y la civilización, sustentado sobre todo por el enfoque social darwinista que pone su esperanza en el desarrollo humano.

Según Guadarrama (2003), dentro de las corrientes positivistas la de más acogida fue la de Herbert Spencer (excepto en países como Cuba, Chile y Brasil), al tener mayor correspondencia con los avances de las ciencias naturales y sociales, en relación con la teoría darwinista y una posición más liberal. Es así que las ideas positivistas generaron resistencia en los sectores más conservadores de las sociedades.

La apropiación de los reduccionismos positivistas en América Latina, se encaminaron en establecer la oposición a las concepciones religiosas, en torno al origen del hombre y el desarrollo social, además no siempre se compartieron las tesis racistas provenientes del darwinismo social y cuando fue así, se apreció el trabajo de la educación y las instituciones civiles para lograr el perfeccionamiento de los grupos humanos. De esta manera, la aceptación de las ideas positivistas

presupuso en algunos casos el planteamiento de una presumida inferioridad de los indígenas, negros, mestizos, etc., y se hizo evidente en algunos representantes al tratar despectivamente a los pueblos latinos, consideraban que tales diferencias con los pueblos europeos podían ser superadas mediante varias vías que suponía el desarrollo educativo, cultural, industrial, urbano, etc. (Guadarrama, 2004, p. 218)

En este sentido, como plantea Guadarrama (2004), no se proyectó una trasposición de los esquemas analíticos europeos sino que hubo la utilización del método de análisis para interpretar las realidades Latinoamericanas que permitiera conocer mejor el desarrollo de estas sociedades y orientarlas de forma más efectiva hacia el progreso. Los positivistas latinoamericanos se preocuparon por las realidades nacionales en los diferentes planos de análisis, es decir, en lo histórico, geográfico, antropológico y demás, “Con criterio científico. Por tanto, contribuyeron a un mejor conocimiento de Nuestra América”. (Guadarrama, 2004, p. 220)

La recepción del Positivismo en América Latina se personificó en figuras como Juan Bautista Alberdi, José María, Luis Mora, Domingo Faustino Sarmiento y Justo Sierra entre otros. Estos pensadores plantearon problemas sobre la orientación de la educación, de las instituciones políticas y sobre el encuentro o choque de razas. Desde el primer problema se cuestionó el papel de la Iglesia como fuente de educación en un momento donde era importante cultivar el sentido mercantil e industrial para poder llegar al progreso e ingresar a la civilización de la que consideran que América del sur ha sido excluida.

Al mismo tiempo, en el siglo XIX el fortalecimiento de los Estados Nación era un deber fundamental para prevenir las nuevas formas de colonización que se pudieran presentar ante los vacíos institucionales, en este sentido, Latinoamérica debería ser *deslatinizada* para dar origen a

una realidad fuera de los parámetros coloniales (Chamorro, 2004). Así, la filosofía se orientó hacia la búsqueda de lo concreto americano. Pensadores como Sarmiento formulan la necesidad del ingreso al progreso siendo agentes activos de la civilización, planteando interrogantes sobre la esencia y el sentido de los latinoamericanos como: ¿Quiénes somos, europeos, indígenas, mixtos?

En este sentido, para Justo Sierra (citado en Zea, 1972), lo importante es la creación de una persona nacional dueña de sí misma, encuentra que en la figura del mestizo se origina el factor dinámico movido por la riqueza y por la lucha contra el poder, mientras que considera al indígena como un animal doméstico y al criollo como un ser retrogrado y preocupado por mantener sus privilegios, esperando, en este sentido, que el mestizo tomara las riendas de las nuevas repúblicas, o como lo entendía Mora (citado en Chamorro, 2004), ejecutara reformas usando la educación como posibilidad para pasar del retroceso al progreso a través de la anulación de la herencia colonial con la desespañolización.

Dentro de estas perspectivas se busca con la filosofía positiva un pensamiento que mire la realidad concreta, las condiciones políticas de los Estados Nación y sobretudo la necesidad de crear naciones con una identidad propia desde la cual se fortaleciera una verdadera independencia del yugo español y de las pretensiones colonialistas de otras naciones Europeas y de Estados Unidos.

Ahora bien, el Positivismo aunque tuvo una mejor recepción dentro de corrientes y posiciones liberales, el rechazo de los conservadores por estas propuestas se fundamentó en el sentido progresista de sus propuestas y en que en algunos casos también se utilizó para justificar sistemas dictatoriales de corte más conservador como es el caso de los porfiristas y castillistas en

México y Brasil respectivamente, que usaron las propuestas comtianas de orden para legitimar sus prácticas políticas autoritarias.

En Colombia, estas ideas fueron bien recibidas por el partido liberal; en los currículos de los establecimientos educativos se impartieron estas doctrinas al lado de los procesos de secularización de las instituciones y de la sociedad, pero al final del siglo XIX los conservadores y en especial Miguel Antonio Caro se lanzaron en contra de los principios positivistas defendiendo el estado religioso como la cúspide del desarrollo social, por lo que, los postulados positivistas son vistos como un claro retroceso al fin último de la sociedad: poner toda su confianza en la razón humana niega sus tradiciones, la verdad y la Autoridad legítima y única.

3.1.1 Las corrientes positivistas

El Positivismo tuvo tres Corrientes de pensamiento en América Latina; la primera, generada por Augusto Comte; la segunda, iniciada por Herbert Spencer y la tercera emanada por Jhon Stuart Mill. En Colombia, desde la crítica que hace Miguel Antonio Caro, sobresale la influencia utilitarista de este último y la de Jeremías Bentham que es adoptada en las aulas educativas como fundamento político y moral.

El pensamiento positivista cambia la forma de concebir y analizar la sociedad. Desde el orden científico se pretende explorar los fenómenos sociales desde la exploración, experimentación y comparación para establecer regularidades y sobretodo dilucidar el mejor camino para las sociedades, en este punto, la confrontación con la corriente tradicionalista y en Colombia, entre el partido liberal y el conservador se hace evidente e irreconciliable.

Comte, a partir del estudio de los fenómenos históricos establece que el desarrollo de la humanidad y del pensamiento pasa por tres estados teóricos: el teológico o ficticio; el metafísico

o abstracto y el científico o positivo; en éste sentido, los métodos de filosofar cobran tres sistemas generales de concepción sobre los fenómenos, que a su vez representan periodos del desarrollo de la humanidad. El primero busca los conocimientos absolutos, la naturaleza íntima de los seres, las causas primeras y finales, la explicación de los fenómenos recae en agentes sobrenaturales, su influencia arbitraria explica las irregularidades; el segundo es una superación gradual del anterior, en este, las fuerzas sobrenaturales son reemplazadas por fuerzas abstractas o abstracciones personificadas, ya en el tercer sistema se reconoce la imposibilidad de encontrar las causas primeras o últimas de los fenómenos, se busca, por medio de la observación y la razón, leyes o relaciones invariables de sucesión y similitud que permita reducir a hechos generales los fenómenos particulares (Comte, 1979), dejando la pretensión de exponer las causas generadoras de los fenómenos.

De esta manera, los dos estados iniciales, tanto el teológico como el metafísico son necesarios en el desarrollo de la humanidad; sin embargo, se requiere de su superación para llegar al estado superior, es decir, el positivo, en el que se busca instaurar una doctrina social común capaz de superar las crisis políticas y morales causadas en parte por la contradicción intelectual, la “divergencia que existe ahora entre todos los espíritus con respecto a todas las máximas fundamentales” (Comte, 1979, p. 35). Aunque para Comte, no se trata de eliminar los dos estados anteriores, ya que, estos son necesarios para posibilitar el desarrollo de la humanidad y las ciencias, las ideas sobre la imposibilidad de encontrar las causas primeras y de la necesidad de pasar de un estadio teológico y metafísico a uno fundamentado por la razón bajo la creencia de la acción transformadora y creadora de la labor humana, genera el rechazo de tradicionalistas y de los sectores del conservatismo colombiano del siglo XIX, que como Miguel Antonio Caro conciben la sociedad colombiana como una sociedad católica que se ve perjudicada por la

enseñanza y la aplicación política de esta doctrina que tilda como liberalesca, en sus palabras, al negar “la soberanía de Dios para atribuírsela al pueblo y luego resulta que ellos son el pueblo; niegan la inefabilidad de la Iglesia para atribuírsela a la razón, y luego hablan sobre el supuesto de que ellos son la razón” (Valderrama, 1990, p. 42-43). Para Caro, la enseñanza positivista y la intención liberal es una afrenta hacia la Iglesia al volcar su fe únicamente a la razón humana y al imperar la necesidad de superar el sentimiento y guía religiosa, por lo cual, concluye que “su soberanía consiste en dejar de ser cristianos, en no acatar más autoridad que su propia voluntad” (Valderrama, 1990, p. 45)

Para el Positivismo, este movimiento histórico pretende el advenimiento de la civilización que es sustentada por la idea de progreso social. Esta idea de progreso surge de la comparación de lo antiguo y lo moderno, tanto de los pensadores como de las estructuras sociales, políticas y económicas; al respecto, Comte, usa como ejemplo a la Revolución Francesa afirmando que es una “tendencia necesaria de la humanidad hacia un sistema político poco caracterizado aun, pero desde luego radicalmente diferente del sistema antiguo” (Comte, 1979, p. 58), en este sentido, el progreso o el lugar de llegada es indeterminado, pero es tal, por ser diferente a lo antiguo o a lo anterior, de esta manera se hace fundamental el impulso revolucionario que lleve al movimiento de las estructuras y a un futuro en términos de progreso y de civilización.

El progreso social en los términos positivistas se enmarca en la superación de las concepciones teológicas desacreditadas (Comte, 1979), en el que el monarca es concebido como el delegado del cielo y los ciudadanos están sujetos de forma incondicional al centrar la soberanía y la autoridad en el derecho divino y hereditario, en la obediencia pasiva o en las centradas en las lógicas bélicas y militares, características preponderantes en los Regímenes de

Estado Antiguos, donde la cooperación es obligatoria y los hombres son reclutados; obedecen órdenes por coerción o bajo pena de muerte, en contraste, la orientación positiva y liberal se argumenta en un régimen de contrato, donde la cooperación sea voluntaria y se pueda abandonar la organización a voluntad. En este sentido, la sujeción de los ciudadanos al gobierno es condicional, proviene del mantenimiento de un pacto entre las partes en la que se resaltan las ideas de soberanía popular, contrato original, independencia parlamentaria, resistencia, abdicación, entre otras, como principios liberales (Spencer, 2007), que además se pueden reconocer como lo opuesto a lo conservador.

El pensamiento liberal se tradujo en la libertad de conciencia, en la abolición de la esclavitud, en la representación de las mayorías, en los procesos de secularización y disminución de las restricciones económicas con miras a disminuir la cooperación obligatoria y aumentar la cooperación voluntaria “el liberalismo representaba la libertad individual contra el Estado coercitivo” (Spencer, 2007, p.25).

Estos principios, en el contexto latinoamericano y particularmente en el colombiano del siglo XIX no solo se enfrentaron a sectores conservadores de resistencia, sino además a altas tasas de analfabetismo a economías no industrializadas y dependientes y sobre todo a una confrontación política atravesada por intereses particulares de donde emergen conflictos locales, regionales y guerras civiles en las que el vencedor se impone al vencido, evitando de esta manera, la cohesión política y social, pero requiriéndole, por un lado, para mantener el poder y sus beneficios y por otro, para implantar su ideal de sociedad.

Desde el Positivismo, el fundamento moral que pretende ligar a la sociedad emerge desde el Utilitarismo que es bien recibido en la sociedad colombiana por parte de los liberales e incluido en los currículos de las escuelas en los procesos de secularización. Este principio es el

de mayor felicidad, se explica desde la sensación de placer y la ausencia de dolor, uno de sus exponentes, J. Stuart Mill (1984) plantea la existencia de cosas o situaciones deseables o placenteras para el ser humano por ser el medio para llegar a la felicidad o por ser el fin mismo de ella.

Según esta corriente filosófica, la necesidad de evitar el dolor es característica de todos los animales, pero los humanos se diferencian de los animales inferiores porque “los seres humanos poseen facultades más elevadas que los apetitos animales y una vez que son conscientes de su existencia, no consideran como felicidad nada que no incluya la gratificación de aquellas facultades” (Mill, 1984, p.47). La felicidad para los humanos no solo depende de la satisfacción de las necesidades básicas de la existencia o de aquellas necesidades puramente corporales, sino le da mayor relevancia a los que denomina placeres mentales, dándole un sentido de dignidad al ser humano que está enlazado en su modo de existencia y sus capacidades. Según Mill (1984), llegar al principio de mayor felicidad es tener una existencia en ausencia de dolor y provista de goces tanto en cantidad como en calidad.

En este sentido, las condiciones sociales y la educación, pueden ser factores que lleven a una vida satisfactoria o pueden convertirse en sus obstáculos, en tanto no fortalezcan los sentimientos de solidaridad por los intereses colectivos de la humanidad, el interés por la vida, la juventud y la salud. Desde un marco individual, Mill (1984) resalta dos obstáculos personales: el egoísmo y la carencia de cultura intelectual, esta última proporciona un interés inteligente por los objetos de contemplación como el arte y la historia.

Vencidos los obstáculos, Mill (1984) demuestra gran confianza en el progreso humano a través de su esfuerzo y empeño, explica cómo los males de la vida son superables, la pobreza con buen sentido y previsión y la enfermedad con buena educación física y moral, control de las

influencias nocivas y con el progreso de la ciencia; de esta manera, los contratiempos que se presentan solo son causados por imprudencias, de los deseos mal controlados y las instituciones sociales nocivas o imperfectas.

La felicidad desde el Utilitarismo, es un bien que se debe conseguir no solo para el agente, sino para todos los afectados, por tanto, desde lo moral reconoce la capacidad del sacrificio individual por un bien mayor, aunque admita que éste no es en sí mismo un bien, pero como medio, debe crear las condiciones de la felicidad del agente bajo la máxima de perfección ideal.

En este sentido, se busca que el bien individual no viole los derechos o las expectativas de los demás, requiere que los intereses sean armonizados con los intereses del conjunto, para lo cual, es fundamental el proceso educativo y la opinión pública; ya que, son estos dos los que forman la conciencia moral individual y colectiva al presentar la moralidad establecida como natural; lo que lleva a que se sancione de forma interna a partir del deber, del deseo de estar unidos con nuestros semejantes y de forma externa a la esperanza de conseguir el favor de los otros o temer a su rechazo; pero no solo de los semejantes sino en algunos casos también de un ser supremo, por lo que al estar la moralidad entendida como natural se va a orientar por la empatía, el temor o el amor, creando una base sentimental que en un estado social genera un sentimiento de asociación.

Este sentimiento de asociación posibilita el entendimiento de que los intereses de todos van a ser considerados por igual, de lo que Mill deduce, que el progreso de la humanidad lleva a vivir entre iguales, debido a que, “se hace imposible vivir permanentemente en términos que no sean estos con todo el mundo, se hace imposible la desconsideración total de los intereses de los

demás” (Mill, 1984, p. 84), el desarrollo armónico de la sociedad lleva al interés individual a identificar sus sentimientos con el bien ajeno, a prestar atención al otro.

Así como para Comte, el progreso de la humanidad está necesariamente ligado al desarrollo moral y la búsqueda de la armonía en detrimento del estado de guerra, para Mill, el sentimiento social cuando está desarrollado en cada persona no puede consentir “en considerar al resto de sus semejantes como rivales suyos, en la lucha por los medios de felicidad, a los que tenga que desear ver derrotados a fin de poder alcanzar los objetivos propios” (Mill, 1984, p. 87), pues como seres sociales se tiende a considerar como deseo natural la armonía entre los objetivos individuales y los colectivos.

Dicho desarrollo moral, basado en el sentimiento de placer y felicidad individual es fuertemente criticado por el Tradicionalismo y Conservatismo que cuestionan la consecución de objetivos comunes o la propia cohesión social en ausencia de principios universales e inequívocos que guíen las prácticas individuales y colectivas. Miguel Antonio Caro, encuentra estas ideas peligrosas, más aun cuando son propagadas desde la escuela a los jóvenes a quienes puede confundir y minar de este modo la unidad nacional que es uno de sus principales ideales políticos.

3.2 **La filosofía tradicionalista**

La filosofía tradicionalista tiene una gran acogida en Europa, en particular, en aquellos a quienes los cambios y propuestas de la Revolución francesa no eran pertinentes o favorables. Esta corriente de pensamiento llegó a Latinoamérica para nutrir los planteamientos conservadores. La filosofía tradicionalista española y francesa fue un pilar fundamental en la construcción de los Estados nacionales en la América Latina del siglo XIX y sobretodo en las

últimas décadas en Colombia al instaurarse en la conciencia política de los más conservadores, ya que, fundamentó un gobierno fuerte y una sociedad cohesionada por principios religiosos.

3.2.1 **La influencia tradicionalista: El partido Conservador colombiano del siglo XIX**

La influencia tradicionalista en Colombia se hace evidente en la idiosincrasia del Partido Conservador del siglo XIX; este partido, sustentan la vida y estructura sociopolítica en los principios religiosos, allí se liga a la nación no solo desde un proyecto político, sino desde la tradición y los vínculos morales que hacen de la población una unidad en busca de la armonía.

El orden y el progreso, se entienden desde una perspectiva beatífica, donde el Estado y la sociedad, como lo expresará Miguel Antonio Caro, cumplen la función de educar, tienen la misma misión de la familia “la autoridad pública debe perfeccionar al hombre” (Zalamea, 1989, p. 236)

Tanto para los representantes del partido conservador como para la política y la vida social, su fundamento son los principios morales de la religión en el marco de respeto a las leyes y a la subordinación a la autoridad, de tal forma que los

(...) intereses materiales y políticos no entren jamás en pugna con los morales religiosos, sino que aquellos y estos concurren al sostenimiento de la paz, a asegurar nuestros derechos, a hacer efectivo el cumplimiento de nuestros deberes y al progreso de la nación en orden y libertad (Zalamea, 1989, p. 232).

En este sentido, los gobiernos deben consultar al bien público que viene de la ley divina (Zalamea, 1989). En el caso en que las sociedades o la política se alejen de los principios morales y de Dios, entrarán necesariamente en desorden, en corrupción y en decadencia, por tanto, para el conservadurismo, la nación colombiana es soportada por su tradición en la religión

católica, pues, en ella encuentra sus principios morales, el fundamento de las instituciones y la proyección de sus metas en una relación indivisible entre la vida social, la vida política y la vida religiosa.

La moral del cristianismo, ley para los conservadores, es una doctrina civilizadora que pugna con la inmoralidad, la corrupción y la perversión, no solo individual sino institucional en todas las naciones, pero en particular para la Colombia del siglo XIX, es su sustento y está vinculada con sus tradiciones, José Eusebio Caro expresa al respecto que “la masa de población granadina, es universal y profundamente católica y enseñada a no ver practicado otro culto que el catolicismo romano, nunca ha gustado de tolerancia de cultos” (Caro, J., 1981, p. 19).

Hace también una crítica a las demás doctrinas, en especial a la del liberalismo, las acusa de querer sustituir la moral interior por la exterior que es solo producto del azar y de contingencias que van en contra de los mandamientos y del Evangelio, además, “contra la conciencia del género humano” (Caro, J., 1981, p. 88); de esta manera justifica también la tradición religiosa no solo como la característica de naciones particulares, sino como el fundamento y el fin último del género humano, donde la aceptación de Dios se puede dar en términos de creación, de actuación constante en las acciones y en los destinos de los hombres, por lo que finalmente va a afirmar que no se puede tener una moral religiosa y otra sociopolítica, esto es, la aseveración de la imposibilidad de una separación de lo religioso, lo civil y lo político.

(...) si admitís un Dios creador, ordenador y legislador, debéis admitir no un Dios muerto sino un Dios vivo, no un Dios inerte sino un Dios activo y libre; y si admitís un Dios activo y libre; creador y ordenador por una parte de una materia inerte y pasiva, creador y legislador por otra parte de inteligencias activas y libres, debéis admitir que la materia, incapaz de acción propia,

necesita de un motor permanente, y que el hombre capaz de acción libre,

necesita de una juez (Caro, J., 1981, p. 142)

De esta manera, Dios es creador, ordenador, legislador y juez, es una noción práctica que se mezcla en la vida física, en las leyes de la naturaleza y en la vida moral en la que se cuenta con el libre albedrío del que Dios es legislador, juez y Padre; de tal manera que alejarse de esta idea es caer en el ateísmo, bien sea teórico o práctico (Caro, J., 1981).

Desde su fundación, el Partido Conservador hace una crítica a las corrientes fundantes del liberalismo provenientes de las doctrinas positivistas, las clasifica como ateas, en contra de la moral y sin fundamento para la nación y, por ende, para su gobierno. Hacia los planteamientos utilitaristas, critica J. Caro (1981) que al poner como fundamento del bien común el placer, se va en contra de los mandamientos, de la pasión de Cristo y sus enseñanzas.

Años más tarde, su hijo Miguel Antonio Caro, En su obra *Crítica al Utilitarismo*, realiza un análisis del pensamiento de Bentham efectuando una crítica al Utilitarismo Jurídico y político, en tanto la construcción de una Ciencia Política desde ese fundamento. M. Caro (citado en Jaramillo, 2001) descarta la utilidad como principio universal en la consecución del mayor placer para el mayor número de miembros de la sociedad como base de la actividad legislativa, criterio para juzgar lo bueno o malo de la ley o de la actuación del mismo Estado. Argumenta que lo útil, en tanto lo es por un fin, es una noción relativa y unido lo útil a lo placentero, considera que el placer es una realidad sicológica, contingente, subjetiva, por lo que no es un criterio para orientar lo éticamente bueno; tanto el placer como el bien deben tener una medida, así, sigue a Santo Tomas (citado en Jaramillo, 2001) en su desarrollo de la idea del bien en sí, lo honesto o bueno para el bien común; desde esta perspectiva, el concepto central de la ciencia

legislativa es el bien, este es el que debe tener validez universal, los gobiernos entonces deben consultar el bien público, hacer justicia y misericordia.

Como lo expresa Sergio Arboleda (En Zalamea, 1989), el fin del gobierno es la felicidad de la patria y a esta felicidad se llega a través de la moralización, del apego a las costumbres y la combinación de los intereses sociales; plantea que las formas de organización políticas son secundarias, debido a que, con todas se puede llegar a la felicidad de la nación siempre y cuando exista uniformidad en la moralidad de los pueblos y los gobiernos, así, “pueden tener los ciudadanos diferentes doctrinas y opiniones, sin que haya por esto entre ellos oposición en principios fundamentales” (Zalamea, 1989)

Este acuerdo en los principios religiosos, independientemente de las organizaciones políticas se explica en que, para los conservadores las ciencias sociales y políticas se derivan de principios ultra filosóficos o religiosos, las verdades religiosas son el fundamento de los principios morales y estos el fundamento de las demás doctrinas, en este caso, es apremiante cerciorarse acerca de cuál es la verdadera religión, ya que, el mundo se divide en escuelas religiosas, no en escuelas o doctrinas políticas (Zalamea, 1989), para los conservadores

El día en que el sentimiento religioso penetre realmente en la vida práctica; el día en que la juventud se persuada bien de que negar a Dios es degradarse y que reconocerlo es elevarse y engrandecerse; el día en que nuestros hombres de estado tengan presente siempre la noción de Dios, como fuente de toda verdad, de todo derecho, de toda justicia, de toda virtud: ese día no habrá partido rojo, todos serán conservadores, todos serán cristianos, ese día alumbrara en la República el espectáculo de la paz verdadera y de la verdadera libertad (Caro, J., 1981, p. 195-196)

El partido conservador, en este sentido, tuvo como principios de su programa el apego al orden constitucional, la legalidad, la moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras, y además, dentro de su programa se plantea la libertad nacional, la igualdad legal, la tolerancia real y efectiva y la seguridad, esto con el fin de vencer la barbarie con la civilización.

Si bien, dentro de los programas de los partidos se encuentra los conceptos o los objetivos de progreso y de libertad, la forma de entenderlos y practicarlos va a diferenciar las dos posturas, para el partido conservador en palabras de J. Caro (1981) la democracia, la libertad, el progreso, pueden entenderse en dos sentidos; el primero, desde lo destructor, salvaje, disolvente y el segundo desde lo pacífico, social y conservador; este último considerado el horizonte del conservadurismo, según su fundador quien afirma que el “título de conservadores indica que detestamos lo que destruye y buscamos lo que conserva, que detestamos lo que enferma y buscamos que sana, que detestamos lo que quema y buscamos lo que alumbra” (Caro, J., 1981, p. 192), desde esta perspectiva, siempre hay algo que conservar, la ley de la conservación es de origen divino y permite la conservación de la sociedad.

Por otro lado, el progreso es tomado como el impulso puesto por Dios en cada sociedad, es el resultado del tiempo en todo lugar donde exista libertad legal, seguridad y justicia, por lo cual, no puede ni debe ser un principio que proclame o defina a un partido político (Caro, J., 1981).

El principio de libertad es tomado como universal absoluto, imprescriptible, con este se puede elegir quien gobierne, dar respuesta a las diferentes necesidades, pero con ciertos límites entre los que se encuentra la perturbación del orden, el ataque por la fuerza a un gobierno legítimo, la solución caprichosa de las necesidades; la libertad encuentra su límite en el derecho

ajeno (Caro, J., 1981) así, a finales del siglo XIX, M. Caro (En Valderrama, 1990) establece que el fin de la ley, el Derecho y el Estado es la defensa de los derechos y no la libertad en sí misma.

3.2.2 Las corrientes tradicionalistas

En el pensamiento de Miguel Antonio Caro se ven reflejadas las ideas de la filosofía tradicionalista, cuyos principales representantes son: Jaime Balmes, Joseph De Maistre y Louis De Bonald, sus postulados influyeron en las ideas filosóficas y políticas de Caro y a través de las cuales sustentó el proyecto político de la Regeneración Conservadora a finales del siglo XIX.

El Tradicionalismo se fundamenta en la idea de autoridad divina, autoridad que es creadora de todo lo existente mientras que la función y el deber del hombre es develar las leyes naturales y seguirlas; en consecuencia, su acción puede modificar, pero nunca crear nada, ni en lo físico ni en lo moral o social. Cada hecho o acción de los hombres tiene un fin, este fin es el plan de Dios, la estructuración de los Estados o las resultantes constituciones, son solo el reflejo o la declaración de derechos anteriores que cobran una figura escrita por determinada reunión de circunstancias, en términos de De Maistre (1995), las constituciones son fortuitas y Dios las emplea para sus fines.

En este sentido, es importante tener en cuenta el sentido de verdad y de moralidad religiosa, desde el pensamiento de Balmes estas dos no se disocian, el conocer la realidad o las cosas tal como son significa querer las cosas como es debido, según la sana moral. Para Balmes, el entendimiento está sometido a la verdad, “la voluntad sometida a la moral, las pasiones sometidas al entendimiento y a la voluntad, y todo ilustrado, dirigido, elevado por la religión” (Balmes, 1976, p. 22)

Así mismo, Bonald (1965) plantea como función de los hombres descubrir el estado originario de la naturaleza y de la sociedad; sus derechos naturales, no la de creación, ya que,

crear solo corresponde a Dios, la libertad del hombre, en este sentido, solo se ve desplegada cuando entiende y sigue el plan de Dios; pero, a lo largo de la historia, para este pensador, el hombre ha querido ser el legislador de la sociedad política, el reformador de la sociedad religiosa, el creador de las constituciones y de las sociedades. En esta tendencia y sobrevaloración de lo humano, Bonald (1965) encuentra el origen de las guerras y las crisis, afirma que estas son solo la naturaleza queriendo volver al orden del que ha sido apartada por los hombres. En este sentido, el papel de la filosofía recae en mostrar la relación de verdad y sociedad o “lo que es igual de Dios e Historia en su necesidad de razón” (Múgica, 1988, p. 62), no solo desde lo abstracto se debe ver que la sociedad histórica se fundamenta en Dios, sino que, esta relación se debe ver como constitutiva de las sociedades.

Las leyes naturales que son los principios de la religión, son el lugar donde emerge lo existente, para De Maistre, todo lo que procede fuera de la religión es infértil, “la ignorancia bárbara ha presidido, sin duda, muchas instituciones; pero la barbarie sabia, la atrocidad sistemática, la corrupción calculada y, sobre todo la irreligión no han producido jamás nada” (De Maistre, 1955, p. 120). Estas palabras, a propósito de la Revolución Francesa, en las que no solo critica los ataques a la religión sino el uso exagerado de la violencia, dan como resultado en la afirmación de que todas las instituciones sino reposan sobre una idea religiosa son efímeras, su fortaleza y duración está determinada, en si están o no divinizadas, “la religión mezclándose a todo, todo lo anima y lo sostiene” (De Maistre, 1955, p. 125) nada es, sino por Dios.

Una vez el Estado se constituye en consonancia al principio de autoridad divina, la relación entre Estado, monarquía o gobierno con los súbditos o ciudadanos, se erige sobre la idea de un pacto en el cual no se pueden atacar las leyes (Bonald, 1965) de esta manera, por un lado, se presupone la obediencia de los súbditos hacia el soberano y por el otro, la actuación de este

último en consonancia con las leyes establecidas que se estructuran según el grado de moralidad de las naciones.

Respecto a la estructuración de las leyes, De Maistre (1955), encuentra una relación entre el grado de moralidad de las sociedades y la dureza o libertad expresada en estas, para él una nación no se puede dar la libertad si no la tiene, es un don de los reyes y la nación debe tener su germen. En su propia reflexión, cada nación, va a encontrar que tiene su propia legislación que no proviene del poder humano, de las deliberaciones o las leyes escritas, sino de la reunión de las tradiciones, las costumbres de la nación y las leyes naturales.

Para Balmes (1939), en este sentido, el que la autoridad o la soberanía no emane de los arreglos de los hombres sino de Dios no contraviene a la felicidad ni a la libertad de los pueblos, por el contrario, sostiene que es benéfico, ya que, evita los desmanes del poder al estar sujeto a la moralidad religiosa y deja a las formas de gobierno la flexibilidad para adaptarse al estado social y político de las naciones; pero, considera que no existe una Constitución capaz de ser impuesta en todos los lugares o una forma de gobierno pertinente para todas las latitudes, ya que en sus términos, se verían falseadas o chocarían con la sociedad, por lo cual, no se puede invocar el predominio de un principio político, puesto que, el fundamento de un buen gobierno radica en su aplicabilidad, es decir, “lo que falta, por lo común, al hombre y a la sociedad, no son buenas reglas, sino su aplicación; no son buenas leyes, sino su cumplimiento; no son buenas instituciones, sino su genuina realización” (Balmes, 1939, p. 23); así, la relación entre las formas de organización políticas y sociales deben estar en permanente acuerdo o correspondencia.

Para el Tradicionalismo, el fin de las leyes no es garantizar la libertad de las sociedades, ésta es una consecuencia del grado de moralidad de las naciones que debe provenir de las características de la propia nación, no se debe “hablar de la libertad como algo absoluto; que es

por el contrario algo susceptible de más y de menos, y que el arte del legislador no es hacer el pueblo libre, sino lo bastante libre” (De Maistre, 1955, p.172), por lo tanto, lo que hace libre a una nación es el amor a la patria como una religión, el respeto a las leyes, la justicia y la virtud.

En este sentido, la realización histórica de las sociedades se manifiesta en el Estado fundamentado en la religión católica. En este sentido, Bonald, sustenta que el hombre existe en función de la sociedad que lo forma a su servicio y “por tanto ha de emplear en beneficio de la sociedad todo lo que ha recibido de la naturaleza y todo lo que ha recibido de la sociedad, todo lo que es y todo lo que posee” (Bonald, 1965, p. 8).

La organización de la sociedad, para el Tradicionalismo, se da en una estructura jerarquizada, no de todos puede ser el gobierno, ya que, la autoridad proviene de una sola fuente, así que “se distribuye con número, peso y medida entre las clases y los individuos” (De Maistre, 1955, p. 152). De esta manera, se legitima la jerarquización de la sociedad como un proceso natural y como proyecto de Dios, su cohesión y la cohesión entre ésta y el gobierno, se sustenta en la moralidad religiosa que le pone freno a las acciones de la sociedad y valida el poder del monarca, quien personifica la fuerza pública y la ley. La conservación de la tranquilidad, en este caso, va a depender de que todos los súbditos, sin excepción alguna, se sometan a este principio; pero, cuando no sea posible, se legitima el uso de la fuerza en aras de mantener el orden cuando “las sociedades no pueden vivir sin freno; cuando falta la fuerza moral es preciso emplear la física” (Balmes, 1939, p. 38); pero cuando las instituciones no cumplen con el objeto para el cual fueron creadas su destino sería la desaparición aclarando que:

(...) No hay necesidad de que se le mate: ella se muere por si misma [...] No

hay gobierno, no hay ley que pueda hacer respetar una institución muerta [...]

por el contrario, en tales casos la ruina del protegido suele acarrear la del mismo protector (Balmes, 1939, p.109)

Una vez se pierde la legitimidad y el apoyo de la sociedad, el gobierno o las instituciones se condenan a la destrucción. Así, se fundamenta la conservación de la tranquilidad y del orden en la disciplina y el apoyo de la sociedad basados en los sentimientos monárquicos y religiosos; para el Tradicionalismo, cuando no se respeta la autoridad, puede emerger la ambición, la rivalidad, la envidia y de allí las insubordinaciones, insurrecciones que dan como resultado el trastorno del Estado.

De esta manera, para Balmes (1939), la estabilidad del poder requiere de dos elementos fundamentales: la seguridad y la legitimidad. Los gobiernos deben tener los medios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, el orden público se convierte en un deber fundamental del gobierno, no obstante, este mantener la seguridad y el orden depende de la legitimidad de los gobiernos y las leyes; el convencimiento de la legitimidad del gobierno es esencial, de no ser así y, aun cuando se gobierne bien, se puede generar inestabilidad al interior del Estado, es imprescindible para éste respetar los principios que la nación respeta, legítimos, enmarcados en la justicia y la ley; es así que el gobernar requiere de un vínculo moral que de fuerza a la consistencia material y que la supla cuando haga falta. Así, Balmes expresa que:

Cuando la nación ha estado por largo tiempo sujeta a la influencia de algún principio, llévale siempre grabado en el corazón y expresado en su fisionomía, así como un individuo apenas puede despojarse en toda su vida de las ideas, costumbres y modales que se le han comunicado en la infancia (Balmes, 1939, p.91)

La nacionalidad no solo se nutre de las formas políticas, sino de la religión, la organización social, las costumbres, las leyes, las tradiciones antiguas; estas características son las que permiten su constitución y su permanencia, cuando se rompe con esta relación, la nación desaparece y desaparece con ella en cimiento de los gobiernos, Balmes considera que puede emerger un poder violento, ya que, solo con la fuerza se podría suplir su debilidad y “tiranizar cuando se esfuerza por hacerse obedecer” (Balmes, 1939, p.46), por el contrario, “el poder político ha de ser la expresión del poder social, pues que, habiendo de reunir la inteligencia, la moralidad y la fuerza, debe tomarlas de donde existan, es decir de la sociedad misma” (Balmes, 1939, p.101), las naciones deben contar con sus propias fuerzas más que con el auxilio ajeno para aprovechar sus recursos, desplegar su energía y no caer en la postración.

Desde la perspectiva tradicionalista, las crisis, las guerras o los estados de turbación en la sociedad, son la consecuencia de la lucha o de la condena que hace la naturaleza a los errores teóricos y prácticos de los hombres, como lo expone Louis de Bonald (citado en Múgica, 1988), las ideas y no armas son las causas de las crisis, este planteamiento supone que el logos busca mantener su vigencia histórica, así, cuando su verdad no está realizada surge el desorden, entendido éste como la ausencia de relaciones necesarias entre los diferentes elementos que constituyen las sociedades, pero no solo en su estructura sino también en la moral y en la ciencia.

Para Bonald

El combate entre el hombre y la naturaleza, para constituir la sociedad, es la única causa de las turbaciones que se manifiestan en el seno de las comunidades religiosas y políticas [...] el hombre no puede dar una constitución a la sociedad religiosa o política, del mismo modo que no puede dar el peso a los cuerpos (Múgica, 1988, p. 64)

Finalmente, al contrario del pensamiento positivista, el Tradicionalismo considera que el estado de guerra no disminuye en tanto la civilización avance, siempre hay estado de guerra desde la nación más bárbara hasta la más civilizada, “cuando el alma humana ha perdido su temple por la malicie, la incredulidad y los vicios gangrenosos que acompañan el exceso de civilización, no puede volver a templarse más que con la sangre” (De Maistre, 1955, p.100), de ser así, las guerras van a eliminar lo enfermo de las sociedades, lo malo y asegura que tras cada gran guerra las naciones han alcanzado la grandeza de la que son capaces.

Bajo los principios anteriormente expuestos, Miguel Antonio Caro fundamenta la necesidad del centralismo, de un Estado fuerte, de la importancia de fundamentar la nación en la moral religiosa que considera; además, como una característica fundamental de la herencia hispana y parte constitutiva de la nación colombiana.

Capítulo IV

4 La Identidad Como Horizonte de Los Estados Nacionales Latinoamericanos

Una vez alcanzada la independencia política, los pueblos latinoamericanos asumieron la misión de estructurarse como una nueva nación soberana, diferente de sus antiguas metrópolis. El cuestionamiento sobre quiénes eran, proyectó su horizonte de acción en lo político, económico, educativo, cultural y de desarrollo de pensamiento.

En su afirmación como nación o en la búsqueda de su identidad, para algunas naciones fue importante reencontrarse, proteger y mantener su legado indígena, encontrar su ser latinoamericano o nacional en el momento previo a la irrupción europea, para otros, la viabilidad de las nuevas naciones se enmarcó en mantener el linaje europeo y entre estas dos perspectivas surgen otras que asumen la historia colonial como parte de la identidad de los pueblos latinoamericanos, pero no niegan lo indígena o africano; desde esta perspectiva, se enfrentan y a la vez convergen razas y culturas.

En este sentido, las propuestas para analizar la construcción o las ideas de identidad nacional en Latinoamérica han sido variadas y tendientes a contemplar las características particulares de América Latina, han tenido en cuenta, siguiendo a R.M. Agoglia (citado en Beorlegui, 2006), lo cultural al buscar los elementos o rasgos específicos que lleven a la construcción de una idiosincrasia particular; lo político al plantear estructuras políticas que afirmen la peculiaridad latinoamericana y lo histórico como conciencia de la liberación política en la que se plantea una tensión dialéctica entre presente y futuro.

No obstante, las identidades latinoamericanas no se han entendido como una preexistencia consiente, Fornet-Betancourt según C. Beorlegui (2006), encuentra en el

pensamiento latinoamericano la presencia de perspectivas que conciben la identidad de las naciones latinoamericanas como una mirada hacia el futuro, como la búsqueda de una utopía o un “estar en espera, en la medida en que vive su ser como un <<no-ser-todavía>>” (Beorlegui, 2006, p. 47), estas posiciones son cuestionadas por quienes recurren al aprehender del pasado para entender y asumir el presente con miras a evitar la pretensión de asumir otras identidades o para situarse en la tensión como resultado de la confrontación de lo indígena-telúrico con lo descubierto, pero este asumir la historia propia va a llevar no solo al conocimiento del pasado sino a una postura frente a lo sucedido y un querer superar lo presente al reconocer en la historia unos pueblos sometidos y dependientes con la necesidad de iniciar un proceso de liberación. (Beorlegui, 2006).

En la construcción de las naciones Latinoamericanas surge la necesidad de consolidar una identidad que permita la cohesión de la población, la ruptura con el pasado colonial y la diferenciación de las otras naciones entendiendo las características que le son propias.

De esta manera, emergen diferentes perspectivas de análisis para el concepto de identidad nacional. Según John R. Gillis (1996), la identidad nacional surge de la relación entre identidad y memoria que brinda un sentido de igualdad mantenido por el recuerdo, con representaciones subjetivas, dentro de unas relaciones de poder que determinan lo que es recordado, para quién y para qué fin. Las identidades fundadas en la memoria, son selectivas e inscriptivas, le sirven a determinados intereses e ideologías, en su análisis, las identidades nacionales construidas o reconstruidas, deben ser codificadas para establecer las relaciones que crea y que pretende mantener. Desde esta perspectiva, las identidades nacionales no existen más allá de las relaciones políticas, sociales e históricas, por tanto, se ha de tener conciencia de las responsabilidades de sus usos y abusos. La actividad conmemorativa es por definición, para

Gillis, social y política, se presenta una coordinación de memorias individuales y grupales, procesos de lucha, pelea y en algunos casos aniquilación. En este proceso se distinguen dos tipos de memoria: la elitista y la popular; la primera, caracterizada por hacer un recuento consecutivo del pasado de forma lineal, de donde ha surgido, por ejemplo, el establecimiento de las fronteras nacionales. La segunda, no hace un recuento consecutivo sino una construcción ligada a momentos específicos o fechas significativas, siendo de ésta manera local y episódica. (Gillis, 1996.)

En la construcción de la memoria colectiva para fortalecer o formar la identidad nacional son importantes los iconos presentes en los monumentos, los museos, los cementerios, para, de esta manera, mantener una identidad común sin importar la clase, la región o el género, así también a través de las obras literarias se enlazan las identidades nacionales o su ideal con las tradiciones políticas y el lenguaje literario.

Para otros el fenómeno nacional es un producto histórico que no escapa a las transformaciones y a la desaparición propia de cada objeto histórico, Ricaurte Soler lo explica dentro del periodo de transición al capitalismo, en el que se requiere una comunidad económica que lo posibilite; no obstante, encuentra en estos procesos de construcción tensiones, sobre todo en los países periféricos como los latinoamericanos, donde se distinguen clases sociales nacionales y clases sociales antinacionales con proyectos políticos que afirman o que niegan la nación (Soler, 1978).

Desde las perspectivas con enfoques culturalistas se encuentran pensadores como Néstor García Canclini, quien usa el término de hibridación para describir los procesos de construcción nacional latinoamericana, lo define como un concepto social, desde el que explica las mezclas culturales tomando como ejemplo la iconografía indígena fundida con la española y

portuguesa; así, encuentra en América Latina la convivencia entre fundamentalismos religiosos, étnicos, analfabetismo y arreglos arcaicos de poder. (García, 1997).

En el marco de los estudios de la conformación de los Estados Nación, Ernest Renan (1882), explica la nación desde las particularidades o la heterogeneidad de las poblaciones que la componen, cuestiona diferentes categorías desde las cuales se ha fundamentado tradicionalmente la idea de nación como lo son el principio dinástico, de raza, de homogeneidad de lengua; también, afirma que la nación se puede separar de estos principios y continuar existiendo. A propósito del principio de lengua, va a explicar que no todas las personas que hablan español o inglés forman una sola nación, puesto que, “hay algo en el hombre superior a la lengua: es la voluntad. La voluntad de Suiza de estar unida, es un hecho mucho más importante que una semejanza del lenguaje” (Renán, 1882). La religión, como otro principio fundante, también para él ha perdido su importancia en la unidad de las naciones, ya que, estas tienen como principio la libertad de conciencia de los individuos.

Pensar la nación desde la comunidad de intereses lleva a establecer tratados, pero se olvida de lo sentimental que le es inherente. La nación es un principio espiritual, constituido por el pasado, por un legado de recuerdos, esfuerzos, sacrificios que lleven a una voluntad común en el presente “es, pues, una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y de aquellos que todavía se está dispuesto a hacer” (Renán, 1882)

Así, en las reflexiones de la consolidación de las naciones latinoamericanas, también se hace referencia a un momento fundacional como un corte en el tiempo que hace referencia a los procesos de independencia política en el siglo XIX, que a la vez, clausura un pasado y da inicio a una nueva época, éste proceso supone la revisión de los orígenes en una multiplicidad de raíces. El esfuerzo fundacional surge en un tiempo posterior al tiempo histórico, con este se busca un

orden ritual que fomente adhesiones y lealtades a un proyecto ideológico y ético. (Achugar, 1998)

Dentro del orden ritual se enmarcan, por ejemplo, los Himnos nacionales, la filatelia, la numismática y el arte. En los países latinoamericanos una vez se conquistó la independencia política se buscó retirar del imaginario colectivo, los iconos o la simbología colonial y rescatar lo precedente, por lo que en la pintura, escultura, xilografía, numismática, filatelia y la emblemática, entre otras producciones de la época, se fusionó el pasado indígena, los principios ilustrados o liberales, la historia de los mártires de la independencia y el sentimiento nacional patriótico.

Es así, como por ejemplo Nanda Leonardi (2009), encuentra en la historia del Perú, en lo que denomina el periodo republicano, entre 1821 y 1879, la propaganda de la ideología criolla y libertadora, que articula el *incaismo* criollo, el monarquismo hispano y el liberalismo anglo francés; articulaciones que pretenden mediar entre las élites y las clases populares a través del uso de esquemas visuales presentes en la memoria colectiva, es así que

(...) Se difunde una iconografía destinada a rescatar imágenes para difundir a nivel nacional en busca de lograr cohesión e identidad gracias a la presencia de actores venidos de diversas vertientes sociales y concepciones estéticas.

(Leonardi, 2009, p. 1254)

Leonardi, halla en este periodo cuatro tendencias específicas: la sanmartiniana, la peruanista, la bolivariana y la nacional; en las dos primeras con fuerte presencia inca como símbolo de rebeldía, de diferencia y pensamiento autónomo, aunque, aclara que justamente va a ser en esta época en que los grupos indígenas pierdan más derechos.

En esta época, la primera mitad del siglo XIX, se crea la emblemática nacional en los nacientes países latinoamericanos, se diseñan las banderas, los escudos y los himnos. La emblemática entendida como práctica sociocultural que tiene como fin difundir ideologías que cambian según el momento histórico y los ámbitos culturales. En los estudios de la semiótica social, sus mensajes son un producto social, que se crea, circula y recibe mensajes en los marcos ideológicos presentes de una época determinada, por lo cual, hay una relación directa entre ideología, agentes e instituciones que participan en la comunicación, contexto de producción y recepción, elementos de los que dependen los significados (Uriburu, 2006), los cuales son asociados a los emblemas nacionales.

En la creación de los escudos nacionales se retoman los principios republicanos y las características geográficas de las naciones que determinan su especificidad; así, en el escudo de Perú se relaciona el sol, los andes, el mar y las riquezas nacionales (Leonardi, 2009), esta tendencia se repite en las creaciones emblemáticas de las nacientes repúblicas latinoamericanas.

En el escudo y bandera colombiana se expone lo geográfico e histórico con elementos de los períodos de la República, la Colonia y la Antigüedad clásica, (Uriburu, 2006) en su descripción e interpretación se encuentra

(...) El ave, el cóndor de los Andes; la cornucopia, la abundancia y la riqueza natural, animal y mineral del territorio colombiano; la granada, el antiguo nombre del país: Reino de la Nueva Granada; el gorro, los soldados que lucharon por su libertad; y el istmo y los dos navíos, el Istmo de Panamá y los océanos Atlántico y Pacífico. La inscripción "Libertad y Orden" se suele interpretar literalmente. A su vez el emblema de la bandera denota los siguientes sintagmas: el amarillo, el oro de Colombia; el azul, el color del cielo

y de los océanos; el rojo, la sangre derramada por los próceres en las guerras de Independencia (Uriburu, 2006, p. 6)

Por otro lado, respecto a la creación de los Himnos latinoamericanos, Susana Poch expresa:

Es posible leer los himnos nacionales actuales no tan solo como copias de una misma matriz poética, sino como el resultado de un proceso histórico que dio lugar al surgimiento de una escritura fundacional modelada y dirigida por el poder, para controlar las significaciones que producían esos textos destinados a un ritual colectivo. (Poch en Achugar, 1998)

En estos textos se retoman las ideas de libertad, igualdad, patria, antepasados, nación, de soberanía del pueblo con la finalidad de convencer, conmover y educar, promueve valores en una continuidad con el pasado y con proyecto de unidad para el futuro. En el análisis de los Himnos latinoamericanos, Poch (en Achugar, 1998), retoma a Hobsbawm al indicar que tiene el objetivo de forjar pertenencia en grupos disímiles, legitimar el poder y las instituciones.

En Colombia, el Himno creado en 1887 es, según José E. Uriburu (2006), una práctica discursiva oficial con el objetivo de reforzar la ideología nacional estatal, evocando la actuación bélica y política de los héroes militares del proceso de independencia y asemejándolo a la épica europea, por lo cual, expone que:

(...) el poeta emplea ciertas imágenes ("centauros", "cíclopes", "epopeya", "termópilas") provenientes de la mitología, la épica y la historia griega para convertir en héroes clásicos a Bolívar y a Ricaurte, cuyas empresas militares son equiparadas con las hazañas épicas consignadas en la Odisea y en los textos históricos de la Grecia antigua. En los versos 33-34 y 43-44, el poeta

compara la muerte de Ricaurte durante la Batalla de San Mateo con la muerte de Leónidas durante la batalla de las Termópilas (Grecia continental 480 a. C.). Al vincular en el himno nacional la cultura griega con la formación de la patria colombiana y la épica europea con el período de la independencia, el presidente-poeta Núñez no hace sino reforzar a través del texto musical la ideología nacional oficial prevaleciente -- aún hoy, aunque en menor grado-- en el discurso historiográfico de Colombia. (Uriburu, 2006, p. 8)

En este texto se resalta la importancia de los héroes militares que al convertirse en mártires se erigen en pilares de la simbología nacional; en el caso de Antonio Ricaurte quien entrega su vida en 1814 a la causa patriota, se convierte en un símbolo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana, en la que, por servicio e intachable conducta se condecora a sus miembros destacados con la Orden del Mérito Aeronáutico Antonio Ricaurte desde 1948. El resaltar la actuación militar dentro del himno nacional, en el marco del periodo de la Regeneración Conservadora toma, por una parte, el sentido de crear o afirmar símbolos tendientes a generar vínculos nacionales; por otra, la de exaltar la importancia de un ejército único que defienda a la nación de las amenazas con el lema “deber antes que vida” (Himno nacional de la República de Colombia, undécima estrofa) y refuerce la idea, no solo de la centralización administrativa, sino también de la centralización militar que redunde en la unidad nacional. Así mismo, refuerza la idea de la tradición católica en el país como eje central del programa regenerador al expresar: “La humanidad entera, Que entre cadenas gime, Comprende las palabras Del que murió en la cruz” (Himno nacional de la República de Colombia) uniendo de esta manera a la idea nacional el pasado hispánico. La simbología nacional colombiana, en este sentido, se origina desde un grupo de intelectuales y políticos que son los que emiten los

mensajes hacia la población, haciendo de éste, un proceso en manos de una élite que intenta cohesionar bajo determinados principios y recuerdos a la sociedad colombiana.

Simultáneamente a la creación de la emblemática nacional, se usa un medio eficaz para la circulación de estos símbolos a través de la acuñación de las monedas, la numismática se convirtió en un medio de divulgación de la iconografía nacional; Desde allí, se popularizan los iconos oficiales como los escudos y los principios que rigen cada época, por lo que es persistente la figura de la mujer de la justicia y la libertad, el gorro frigio; iconos que representan la fraternidad, la unidad, la igualdad, la lucha de los procesos de independencia, con la exaltación a los héroes nacionales como José San Martín, Simón Bolívar, Santander, entre otros y símbolos que representan la consolidación de las repúblicas, como por ejemplo, el uso del escudo de la Asamblea General de 1813 y el sol antropomorfo en Argentina.

Respecto al proceso de construcción de la nación colombiana, a mediados del siglo XIX los pensadores y políticos de la época encuentran diferentes contradicciones, en 1857 Mariano Ospina expresa cómo los intentos de construir un Estado Nacional en Colombia han llevado a copiar instituciones políticas de otras naciones “para transformar la nación vaciándola en un molde nuevo” (Zalamea, 1989, p. 228), critica así los intentos de cambiar las costumbres, los hábitos, las tradiciones y las cosmovisiones con celeridad; para él, el cambio de una nación o su misma formación, solo se da dentro de un proceso histórico en el que se funden opiniones, costumbres, tendencias y razas, integrando un todo físico y moral homogéneo, lo que la sociedad de su época aún no era; a mediados del siglo XIX, la unión nacional se fundamenta, entonces, en la búsqueda de la seguridad interior y exterior.

José María Samper (en Zalamea, 1989), unas décadas más tarde, caracteriza a la sociedad colombiana como un pueblo republicano en espíritu, necesidades y aspiraciones;

demócratas en sus pasiones, pero un pueblo sin convicciones, unos por envidia a las superioridades, otros por su espíritu revoltoso y otros aun con una cultura política enmarcada en el caciquismo. Además, resalta la carencia de unidad social y de raza dificultando la implantación del régimen republicano al vedar el principio de igualdad en relación con el de justicia; por lo que, considera que:

(...) siendo el régimen republicano el más complicado y difícil, el más sabio y perfecto posible, somos incapaces por nuestra ignorancia general por nuestra pobreza, nuestra falta de unidad y la enorme desproporción en la que se hallan nuestro territorio y nuestra población, de practicar el gobierno republicano con todas sus consecuencias; por lo que nos es forzoso moderarlo dejando a la autoridad y a la parte ilustrada y fuerte de la sociedad mucho de lo que en mejores condiciones sociales podría y debería dejarse a la libertad a la iniciativa individual a la gran masa del pueblo (Zalamea, 1989, p. 233-234).

Es así, como la consolidación del Estado Nacional y su fundamento, la identidad nacional, se convierte en un proyecto en manos de las élites, en un proceso desde arriba al cual se pretende hacer adherir a la población. En el periodo de la Regeneración Conservadora se intenta la construcción de una nación, desde lo histórico, simbólico y tradicional, de forma tardía con relación a los demás países latinoamericanos, se instituye un himno nacional, se hacen otras propuestas de unificación nacional desde el catolicismo y de construcción de identidad desde un ideario político orientado por el Partido Nacional en cabeza de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro.

La Constitución de 1886, estructurada por Miguel Antonio Caro, instituye el nombre de República de Colombia, se consigna en ésta la centralización del poder público, se fortalece el

poder ejecutivo, contempla como pilar de todas las instituciones a la Iglesia desde sus primeras líneas expresa “En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad”; Es así como se le delega, no solo la educación sino también el control social y toda autoridad.

Virginia Gutiérrez, en este sentido, destaca la influencia de la Iglesia en la población colombiana (especialmente en Antioquia), en el orden social expone que la creencia religiosa católica engendra un culto y una moral que se extravierten en la colectividad y en la acción individual, un culto proyecta valores que legitiman su cumplimiento con la connotación de premios o castigos de naturaleza terrenal o ultraterrenal como consecuencia de los actos de cada ser, en este marco se produce una aceptación de pautas de vida que fomentan el enlace social (Gutiérrez, 2000). La Iglesia Católica también influyó en la homogenización de los símbolos y las fiestas nacionales, estas se establecieron en disputa con la Iglesia.

En el carácter unitario de la nación los Estados pasaron a ser departamentos y se elimina la elección de ejecutivos regionales; desde lo económico se crea el Banco Nacional y acuñar una moneda única. Es así como Carlos Patiño Villa expresa, que “solo hacia finales del siglo XIX se logró conquistar e imponer la acuñación y circulación de una moneda única, por encima de los intereses y las practicas regionales” (Patiño, 2005)

El periodo de la Regeneración también articuló al orden central a los militares, buscando tener el monopolio legítimo de la fuerza, creo una fuerza militar organizada, con un ejército profesional, tecnificado, le dio un estatuto, un fuero y consigno que no fuera deliberante.

La reorganización de la Regeneración buscó códigos fundantes que definieran la nacionalidad y su constitución planteó puntos específicos en la cultura social encargando para este fin a la Iglesia, limitó la libertad de prensa, el comercio de armas, restringió los derechos individuales y pretendió garantizar la paz por medio del ejército.

De esta manera, la Regeneración Conservadora se erige como un periodo histórico que aporta algunos elementos de una identidad nacional desde una propuesta filosófica y política, que tiene en cuenta las contradicciones que el propio momento histórico plantea, ya que si bien este periodo estuvo enmarcado por guerras civiles, la pérdida de Panamá y la exclusión de la oposición, es de gran importancia en los aportes para la estructuración simbólica, en el intento de la construcción de identidad nacional colombiana desde la perspectiva tradicionalista que sustenta la vida social y política en la religión.

Capítulo V

5 La Regeneración Y Miguel Antonio Caro

El proyecto regenerador en cabeza de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro se impulsó bajo la idea de poner fin a los errores de la Constitución de Rio Negro. La Regeneración fundamentó su discurso en lo que denominó los errores del liberalismo y sus consecuencias en el plano social, político y económico. A partir de esta posición en el periodo de la Regeneración Conservadora se intenta implementar un ideal de sociedad que va a reflejar en gran medida el pensamiento filosófico y político de Miguel Antonio Caro.

M. Caro como humanista, político y periodista de la segunda mitad del siglo XIX, dirigió parte fundamental del proyecto regenerador, criticó la influencia y orientación liberal en el país como un modelo que no reconocía la historia y las tradiciones de la sociedad, las cuales, eran fundamentadas en su origen hispano de donde vienen las tradiciones más importantes a saber: la lengua y la religión.

El pensamiento de Miguel Antonio Caro se inscribe en la emergencia y la lucha de los partidos tradicionales colombianos por conseguir el poder público e implementar su ideal de Estado Nacional, estas aspiraciones por parte del partido liberal y el conservador llevaron a la exclusión del uno por el otro y, a dirimir las discusiones por medio de la violencia deslegitimando los argumentos del adversario para proponerse cada uno como la salvación o la mejor opción para configurar el poder público y la sociedad colombiana. De esta manera, el problema de la estructuración del Estado-nacional en Miguel Antonio Caro se sitúa dentro los postulados de la filosofía tradicionalista y el hispanismo en el marco de la disputa entre el partido

conservador y contra las propuestas anticatólicas emanadas de las perspectivas positivistas-utilitaristas adoptadas por el partido liberal colombiano.

En su pensamiento se destaca la importancia de fundamentar el Estado nación bajo el principio de autoridad divina, en este sentido, la Iglesia Católica se convierte en fundamento y garante del poder político y de la verdad misma, de la cohesión social y el camino de salvación de los pueblos, por lo que en el debate y en la confrontación con el partido liberal se genera en el pensamiento de Caro la idea de una lucha del bien contra el mal.

Miguel Antonio Caro concibe la nación como una persona moral, resultado de la madurez de los pueblos, que en su devenir han adaptado las tradiciones, costumbres y necesidades al principio de autoridad divina y a la ley natural como principios rectores del orden social y político. Desde el Tradicionalismo la nacionalidad no solo se nutre de las formas políticas, también de la religión, de la organización social, de las costumbres, de las leyes y de las tradiciones antiguas. Estas características son las que permiten su constitución y su permanencia; sin embargo, si esta relación llegara a romperse, la nación desaparecería (Balmes, 1939). Así, la moral cristiana es la que fundamenta y cohesiona a la sociedad; por lo tanto, la búsqueda de Dios es lo que le da sentido al individuo y a la sociedad.

Bajo estos planteamientos, Caro analiza su tiempo y encuentra que por las enseñanzas que postula como inadecuadas, provenientes del Utilitarismo la sociedad llega a lo que llama nuevo paganismo o apostasía moderna, ya que los individuos se concentran en la satisfacción de los placeres, de las necesidades mundanas, del progreso material y se aparta del verdadero sentido de la vida: la búsqueda de Dios; por lo cual, al pretender rectificar este error protege la religión Católica y la erige como fundamento de la sociedad y de lo político.

Para garantizar la protección de la religión católica y la de sus principios en la sociedad colombiana, M. Caro (1993), cree que es necesario frenar el avance de los gobiernos *ateos*. En el análisis que hace de su época, considera que “el gran error contemporáneo no es tan solo del orden religioso, sino del orden religioso en sus relaciones con el orden político” (Caro, 1993, p. 245). Por consiguiente, para restaurar en el orden civil los principios católicos, propone la creación de un partido político católico, si bien, reconoce que el Partido Conservador defiende entre sus principios ideológicos los principios católicos, cree que en algunos de sus integrantes confluyen intereses contrarios a los emanados por la Iglesia. (Caro, 1993)

Los fundamentos que establece este político para exaltar la necesidad de este partido se originan en el carácter misionero de los católicos, estos son los encargados de la conversión de las almas y de la organización de la sociedad. Por esta razón, ajusta el programa filosófico político del partido al Syllabus de Pio IX, en el que prima la máxima de que “las potestades de la tierra también deben entrar en comunión católica y rendir culto a Jesucristo” (M. Caro, 1993, p. 246), negando la división entre Estado e Iglesia.

En 1871 Caro establece el programa del partido católico, en él se evidencia el ideal de Estado Nación para Colombia y algunos principios del proyecto de la Regeneración Conservadora. En primer lugar, ratifica el principio de autoridad destacando infalibilidad pontificia, aprueba cualquier forma de gobierno mientras éste respete los derechos de la Iglesia y promueva la práctica de la virtud individual y colectiva; para él, los gobiernos en países católicos deben ser católicos y el nombre de Dios debe guiar las cartas constitucionales. Estas ideas, en el ejercicio se convierten en la necesidad de que la autoridad civil apoye la eclesiástica, en que la educación sea guiada por la Iglesia para que se garantice la restauración de las tradiciones de la Iglesia en concordancia con el Syllabus. De esta manera, en el programa del Partido Católico se

evidencia la idea de Estado nacional que Miguel Antonio Caro, años más tarde va a desarrollar en la Regeneración Conservadora y que será estructurado en la Constitución de 1886.

Esta idea en su origen religioso, católico, no encuentra diferencia en la esencia de las naciones al considerar que el sentido de cada una se halla en la búsqueda de su salvación; en este sentido, la diferenciación entre las naciones radica en la estructura política que adoptan para responder mejor a sus necesidades como producto de su historia y costumbres. El objetivo de la estructura política no es contrariar el objetivo esencial de las naciones, es decir, la búsqueda de Dios; la función de los Estados y de sus gobiernos es la de ser garantes de la búsqueda de la Verdad que es el camino hacia la salvación.

En el debate y estructuración de la Constitución de 1886 Caro ejerce gran influencia, por lo cual, en su preámbulo se hace el reconocimiento de Dios como fuente de toda autoridad desde la cual se fundamenta la unidad nacional. Así mismo, se establece en la Carta Constitucional la nacionalidad por nacimiento, por origen o vecindad y por adopción y, se establece como la religión propia de los nacionales a la Religión Católica, Apostólica, Romana. Esta idea es fuertemente defendida por Miguel Antonio Caro, no solo desde los principios metafísicos sino desde el análisis histórico de la nación. Así, basándose en los censos (probablemente el de 1870 o el de 1864) afirma en sus intervenciones ante los delegatarios la importancia de afirmar los derechos de la nación como una nación católica (Caro, 1951) y al argumentar esta característica de la nación, cuestiona la influencia de ideologías exógenas, anticatólicas, que no pertenecen a las tradiciones ni a la historia de Colombia; Además, expresa la importancia de defender una identidad para proteger lo nacional desde las características tradicionales de la población, por lo cual afirma: “No nos despreciemos a nosotros mismos, no empecemos a constituirnos en

defensores oficiosos de intereses exóticos y contingentes, abriendo la puerta a quien sabe qué especie de exigencias futuras” (Caro, 1951, p. 63).

En la Constitución queda sellada la relación entre el poder espiritual y el poder temporal. En principio, aunque en la Constitución de 1886 se declara el ministerio sacerdotal como incompatible con el desempeño de cargos públicos, se permite a los sacerdotes católicos ser empleados en la instrucción o beneficencia pública, se da la libertad a la Iglesia Católica para administrar lo espiritual, lo concerniente a la jurisdicción eclesiástica y además se le da personalidad jurídica a cada Diócesis para ejercer actos civiles. Dentro de las bases de la reforma se inviste a la Iglesia Católica con derechos y al mismo tiempo con el deber de organizar y dirigir la educación pública en consonancia con el sentimiento religioso del país (Artículo 41 de la constitución de 1886).

En el marco de la defensa de la idea de entender la nación colombiana como una nación católica, la discusión por el principio de libertad religiosa, impulsado por los liberales y característico del debate político de la época, se orienta desde la posición paternalista de Caro, en la que predomina la preferencia por cerrar los caminos que conduzcan al “error” o al pecado; de manera que busca delimitar la libertad de tender al “mal”. Defiende la necesidad de que la instrucción pública esté orientada y dirigida por la Iglesia, argumenta que la ausencia de la educación religiosa, como se concibió en la Constitución de Río Negro, “engendra monstruosidades morales” (Caro, 1951, p. 59); para él, fue el cristianismo el que educó a los criollos en términos de traer la civilización al continente. En la expansión histórica del orbe católico encuentra un signo de veracidad y pertinencia como base de la civilización moderna y, por tanto, de la solidez del Estado nación colombiano; además, concebía que sin educación religiosa las demás reformas institucionales y legales no serían eficaces.

Para Caro, la educación religiosa no interfiere o no se opone a la libertad de cultos, pues, manifestaba que toda persona tiene la necesidad de recibir instrucción religiosa, aunque los padres tienen el derecho de decidir la religión que se profesa no pueden negar la instrucción religiosa como parte del desarrollo de las personas.

El padre no tiene derecho a privar al hijo del alimento necesario para su desenvolvimiento físico; tampoco podría por lo mismo quitarle lícitamente el alimento moral [...] el padre tienen derecho a decidir en qué religión o confesión ha de educarse el hijo; pero no a impedir que reciba instrucción religiosa en alguna forma (Caro, 1951, p. 59).

De esta manera, en la Constitución de 1886 se instituye la educación católica en manos de la Iglesia para fortalecer la tradición religiosa del país; por otra parte, para fundamentar su Artículo 39, que hace referencia a la libertad de cultos, se establece cierta libertad religiosa en la que las personas pueden expresar sus opiniones religiosas y profesar sus creencias; no obstante, siempre y cuando el culto no sea contrario a la moral cristiana o “subversivo del orden público” (Artículo 40) por lo cual la libertad, es una libertad restringida a los propios lineamientos de la Iglesia Católica.

Estos acuerdos constitucionales obedecen a los planteamientos de Caro, respecto a cómo debería ser la óptima república, deja protegida a la Iglesia para que administre lo espiritual y desde donde emana la autoridad; para él, primero se obedece a Dios que a los hombres, la autoridad divina es el vínculo único de obligatorio cumplimiento para la población, de allí deriva la autoridad civil que administra el orden temporal; esta autoridad proviene de Dios; por eso, autoridad civil y autoridad divina no se niegan entre sí; el orden temporal debe ser una expresión del espíritu, en esta relación se devela el orden natural y la ulterior libertad y felicidad de los

pueblos. En este sentido, Caro sigue a Balmes cuando afirma que el poder no proviene de los arreglos de los hombres, no hay más poder que el que viene de Dios, así se evitan los desmanes del poder debido a que los gobernantes también están sujetos a la moral religiosa (Balmes, 1939). Con estos argumentos M. Caro deslegitima el concepto de soberanía nacional proveniente del liberalismo y aplicado en la Constitución de Río Negro al encontrar contradicción con el principio de autoridad, para él “pulverizó la soberanía nacional creando tres soberanos absolutos, la nación, la provincia, el individuo” (Caro, 1951, p.147); Es así como se pierde el respeto a la autoridad por el disenso o las contradicciones que puedan existir entre estas tres fuentes de autoridad.

En consecuencia para Caro, una cosa es el respeto y la aceptación del principio de autoridad, que debe ser único y constante a todas las naciones pero, por otro lado, le es indiferente, en términos teóricos la estructura política o las formas de gobierno; los gobiernos monárquicos o republicanos no se juzgan como buenos o malos sino en relación con los beneficios que le traigan a la sociedad, el gobierno de uno o el gobierno de las mayorías, la promulgación de muchas leyes o de pocas, dependen no de la idealización de determinada forma política sino de la tradición, las costumbres y el desarrollo moral de la sociedad para que su implementación redunde en la cristianización de los pueblos. En este sentido, encuentra imprescindible que los gobiernos sean católicos, independiente de su estructura. Frente a las críticas que se hacen de los regímenes católicos, no desconoce los errores que puedan haber cometido; pero, afirma que no son malos, las debilidades que tienen las asocia no con el hecho de que sean católicos sino en que no han sido buenos católicos.

La estructuración política de las naciones para Miguel Antonio Caro busca el reconocimiento y cumplimiento de la ley natural; ya que, para él es considerada universal y

revelada por Dios a los hombres; desde este principio de ley natural se establece la posterior relación entre autoridad, bien, verdad, orden, progreso, derecho y las facultades de guía única de la Iglesia Católica, en este sentido, para Caro

Dios es este maestro de maestros, rey de reyes. Él dicta la ley universal, la enseña a la razón (esta ilustración es lo que llamamos ley natural), y complementa su enseñanza mediante la revelación. Todos los seres reciben, pues, cierta instrucción divina preliminar; llegan predispuestos a este gran teatro; lo que hay es que en general esa instrucción es servil, ciega: cumplen los seres mandamientos que no entienden; al paso que en el hombre es racional y noble; él no solo tiene tendencias instintivas relativas al cumplimiento de su destino natural sino también ideas más o menos claras de su misión sobrenatural. Estas ideas, estos instintos racionales, son la ley natural. Negar la ley natural es degradar al hombre a la esfera de los entes faltos de razón. (Caro, 1869, p. 141-142)

En este sentido, y como es sustentado por el Tradicionalismo, la misión de los seres humanos en la sociedad no es creadora, es de identificación, comprensión y adaptación de la ley natural a las estructuras sociales y políticas que deben tender a la idea del bien que reposa y es fundamento de la ley natural depositada por Dios en los hombres. Así M. Caro expresa que:

Orden, justicia, perfección: estas concepciones que constituyen la idea del bien, no pueden subsistir en un estado indeterminado, abstracto; ellas manifiestan la necesidad de una fuerza idéntica e inteligente, alma de la creación, razón suprema del espectáculo en que somos actores y espectadores. Nosotros no realizamos el tipo de lo perfecto; aspiramos a él con incesante anhelo; no lo

vemos y, sin embargo, lo concebimos existente, realizado. Bien es una idea abstracta a que nos sentimos atraídos con un sentimiento de adhesión más racional y justa, a medida que ella, saliendo de su abstracción, se personaliza en Dios. Orden, bondad, belleza, son lineamientos que ilustrándose, conforman ese nombre santo. Y en este sentido podemos decir que “en Dios nos movemos y somos” (Caro, 1869, p. 178)

Para Miguel Antonio Caro la noción del bien es innata en los hombres, la cual, a través del desarrollo de la inteligencia se esclarece y, al hacerlo, el hombre puede determinarse y ser libre; es en este momento, en que el hombre tiene la verdadera conciencia para decidir, asumiendo principios motores, instintivos e intelectuales. La realización del bien hace parte de la evolución legítima de la actividad humana; pero, el bien no corresponde a la orientación subjetiva de cada quien, es un universal al que todos deben aspirar. En palabras de Caro

El bien en sí, como la verdad, es uno, y una por consiguiente debe ser la moral. La diversidad de creencias supone mezcla de error. Cuando el error desaparece, la verdad recobra su unidad natural. No es esto una hipótesis, ni una idea contingente; no una ficción ni un conocimiento adquirido por los sentidos, es un principio necesario. En el hecho mismo de presentarse la diversidad de creencias como prueba de que no existe la verdad, los adversarios de ésta reconocen como incontrovertible un principio por lo menos: el de que la verdad tiene que ser, una. Ahora pues, el catolicismo es uno, y toda su labor es labor de unificación. El catolicismo, respetando desigualdades naturales, empieza su obra de unificación en la cuna. (Caro, 1869, p. 89)

Según Caro, la idea del Bien y la Verdad se encuentran en los principios de la Iglesia, de allí la importancia de la educación religiosa y de los gobiernos católicos, los dos convergen en el objetivo fundamental del pensamiento político M. Caro. La unificación católica, es el horizonte de las sociedades, desde donde caminan hacia la perfección; lo anterior, en razón a que los principios religiosos los orienta la justicia y contienen el orden natural; por lo cual, la misión de la Iglesia Católica y de la responsabilidad de los Estados, es la unificación moral a través de la reforma de los corazones de los hombres orientada según las enseñanzas del evangelio. Dicha unificación moral redunda en el objetivo de las sociedades, afirma Caro que si el carácter de la sociedad es el mismo que el de la persona, el fin sería el mismo, “mejorarse, educarse, perfeccionarse, asimilarse al tipo de lo bueno de la sociedad, mejorar al hombre” (Caro, 1869, p. 134)

La sociedad así concebida tiene la responsabilidad de buscar el bien, de educar a los hombres como una gran familia, a la que Caro atribuye un gobierno paternal más que administrativo y que tiene como características el amor, la antigüedad, la fuerza y la permanencia, que educa a través de las penas y las recompensas, distribuyendo de esta manera las sensaciones de temor y esperanza. Para Caro, gobernar es equivalente a educar y quien educa debe tener unas nociones preconcebidas sobre qué enseñar, por qué y cómo hacerlo; así, lo que enseña la sociedad es lo que debe procurarse y lo que debe evitarse con el fin de tener una sociedad espiritual y culta conforme al orden natural promulgado por la Iglesia Católica, a través de medios de acción y de corrección (M. Caro, 1869).

Por tal razón, la autoridad civil tiene como misión fundamental la educación de los pueblos para encaminarlos hacia una vida de virtudes cristianas entre las que la justicia y el bien de todos sean principios fundamentales. Siguiendo la filosofía tradicionalista Caro ratifica que

dicha autoridad civil es carente de la gracia creadora, su acción se extiende a regular e impulsar a la sociedad, según él “Toca al gobierno civil mantener el orden interno y la paz pública, administrar justicia, reprimir el mal y castigar a los malhechores, defender la independencia y la honra de la nación” (Valderrama, 1990, p. 248), lo que implica, entre otras cosas, educar y proteger a los ciudadanos.

En este marco, el papel de la ciudadanía consiste en la obediencia primero a Dios y a las leyes naturales y luego a las leyes civiles, que no deben contradecirse, ya que, de haber divergencia se da paso al desobedecimiento de aquellas leyes que impliquen pecado y que lleven por tanto al desorden en la sociedad. M. Caro, siguiendo a Balme considera que las legislaciones deben acatar la justicia en concordancia con las leyes naturales y divinas; allí, la ley encuentra sus límites y su extensión “porque solo a Dios pertenece la soberanía” (Valderrama, 1991, p. 19.), el espíritu cristiano en el gobierno y en las leyes, supone para este pensador, la constancia de la paz y el acercamiento a la perfección.

El ciudadano, que además es cristiano, tiene una responsabilidad no solo individual en su salvación, también tiene responsabilidad colectiva con la sociedad. En el ejercicio de su profesión y en el respeto de las leyes, su principio rector es el de la justicia. Para M. Caro, si quienes gobiernan son cristianos, cristianos serán los gobiernos y por tanto justos, debido a que, “no es racional que haya para el hombre dos leyes y dos conciencias; que como particular se sea cristiano y como ciudadano o como magistrado pueda declararse impío, ya que no podemos sin renegar implícitamente de nuestra fe admitir a discusión los argumentos racionalistas de los que no creen en Cristo”. (Valderrama, 1990, p. 94.). Así, M. Caro establece la imposibilidad de escindir lo civil de lo religioso, argumenta que antes de ser ciudadanos, funcionarios públicos o cumplir con los diferentes roles civiles, se es cristiano y ese ser cristiano se expresa en la forma

en que se asumen las decisiones, las prácticas socioculturales o los diferentes roles sociales, necesariamente si se es buen cristiano se será buen ciudadano, buen profesional, buen funcionario público, porque la moral cristiana es anterior a cualquier moralidad y al estar fundamentada en la justicia, cada acción humana, en tanto se sea buen católico, será justa.

El liberalismo, desde la perspectiva católica de M. Caro, encuentra en los principios de autoridad del pueblo y confianza en la razón humana una forma de “arrastrar incautos a las tinieblas” (Valderrama, 1990, p. 103), y lo acusa de promover una forma nueva de paganismo en la que se deja de ser cristiano para acatar la voluntad propia y fundar la autoridad del pueblo y subvierte el bien por el placer y el derecho por la fuerza.

Distingue Caro desde ésta perspectiva dos tendencias en su época; por un lado, la escuela del derecho y, por otro lado, la del Utilitarismo de postura liberal. En la primera, asegura, se es fiel al respeto de la moralidad y la justicia desde las que emergen las demás cosas buenas o útiles para el hombre. Desde la segunda tendencia, al predominar lo útil sobre lo justo, el concepto de bien se relativiza en cada persona y en cada circunstancia, siendo una cosa buena y mala al mismo tiempo dependiendo de los intereses en conflicto, lo que permite, para Caro, que el interés particular subordine la sociedad moral.

Estas ideas son objetadas desde el liberalismo de la época, no solo en Colombia sino también en otros países latinoamericanos. Desde la influencia de la corriente positivista-utilitarista se erige la felicidad como principio rector de las sociedades. La fundamentación de este principio se contrapone a los lineamientos del Tradicionalismo y del conservadurismo; ya que, se fundamenta en la sensación de placer y la ausencia de dolor.

La línea positivista-utilitarista plantea la existencia de cosas o situaciones deseables como medio para llegar a la felicidad o por ser el fin mismo de ésta, la felicidad humana no solo

depende de la satisfacción de las necesidades básicas de la existencia o de aquellas necesidades puramente corporales, sino que le da mayor relevancia a los que se denominan placeres mentales; por lo cual, existe una jerarquía entre los tipos de placer, a razón de que, hay unos más deseables que otros, según Mill “pocas criaturas humanas consentirán en transformarse en alguno de los animales inferiores ante la promesa del más completo disfrute de los placeres de una bestia” (Mill, 1984, p.50). Hay un sentido de dignidad que está enlazado en el modo de existencia y las capacidades humanas empleadas en la consecución de la felicidad.

Según el Utilitarismo (Mill, 1984), para quienes la capacidad de goce es pequeña, podrán satisfacerse plenamente al tener mayores oportunidades de satisfacción; pero, por el contrario, un ser bien dotado o que ha experimentado un placer mayor, continuará eligiéndolo a pesar de que requiera mayores esfuerzos o molestias y se dé en menor cantidad que otros; solo la debilidad de carácter llevaría a que se elijan los placeres inferiores sobre los más elevados. La determinación de cuáles son los placeres elevados está en manos de quienes tengan la experiencia o el conocimiento de ambos al margen de las cualidades morales o las consecuencias de éstas. La elección de los placeres elevados va de la mano con los sentimientos nobles de las personas, dicha nobleza, es afectada por influencias hostiles, falta de sustento o por no tener tiempo ni oportunidad para desarrollarse. Así, el Utilitarismo solo puede alcanzar sus objetivos al crear las condiciones para el cultivo general de la nobleza donde cada individuo se beneficie de la nobleza de los demás y de la propia.

En este contexto se podrá, según Mill (1984), llegar al principio de mayor felicidad, es decir, en una existencia libre de dolor y rica en goces, tanto en cantidad como en calidad, la definición que brinda este autor sobre la felicidad no es la

de una vida de éxtasis, sino de momentos de goce, en una existencia constituida por pocos y transitorios dolores, por muchos y variados placeres, con un decidido predominio del activo sobre el pasivo, y teniendo como solo fundamento de toda la felicidad, no esperar de la vida más de lo que la vida pueda dar (Mill, 1984, p. 56).

Esta postura es señalada por Caro (1869) como errónea, el permitir que se disemine en la población y sobretodo en la más joven es contribuir al deterioro moral y social de la nación, tener como balance el placer o la ausencia de dolor es quedar en la primera etapa del desarrollo humano. Para Caro el hombre primero es instintivo y sensitivo; a través de los impulsos diferencia y guía su conducta hacia lo agradable o lo desagradable en el orden de lo físico y también del sentimiento; es decir, en lo físico y en lo moral, este primer momento del hombre es característico de la niñez, pero a medida que se desarrolla la inteligencia se modifica la conducta humana bajo el criterio de la razón. En este momento del desarrollo humano se complejiza la relación entre lo bueno y lo placentero, en el anterior estaban directamente relacionadas, pero en este se subordina el placer al criterio racional, aunque sin negarlo.

Para Caro (1869), los conceptos de placer y dolor no son determinantes, los dos pueden constituir un mal, el primero cuando lo encubre y se prolonga para llevar al vicio y el segundo cuando se asocia a un bien, cuando su intensidad no corresponde al mal que anuncia y cuando es prolongado e intenso. En este sentido, el placer y el dolor pueden ser un instrumento del bien o del mal, solo la razón puede hacer la diferenciación a medida que se va desarrollando la inteligencia y devela las leyes de la naturaleza y de la naturaleza humana, el orden natural metafísico y el orden natural físico. En el primero se da el perfeccionamiento de las facultades

mentales y los talentos, en el segundo se trata de mantener el orden físico, la salud y la comodidad.

Así, los planteamientos de los liberales y los conservadores respecto a la naturaleza misma de la felicidad, objetivo de todas las sociedades, se encuentra polarizada. Para M. Caro (1869) el Utilitarismo que pone como eje de la felicidad y de lo bueno al placer, solo identifica una de las primeras fases del desarrollo humano, deja de lado la actividad racional que lo caracteriza y el deber fundamental de cada individuo por hacer el bien, por conocerlo y por seguirlo.

Caro (1869), admite la existencia de un orden moral que le da dirección a la conducta humana, este orden moral es develado por los seres humanos a través de la razón; por un lado, desde la experiencia y la aprehensión de la verdad y, por otro, de las predisposiciones intelectuales o de las ideas innatas que se constituyen en creencias y/o modificaciones espontáneas de la inteligencia. Así, los hombres deben cumplir sus deberes, es misión de cada ser humano buscar los deberes que deben ser cumplidos, en aras de cooperar en la realización de la justicia y del orden natural.

En este sentido, M. Caro convierte a la justicia en uno de los bastiones del discurso regenerador, fundamentándolo desde la filosofía tradicionalista, éste permea o direcciona otros principios como el de libertad, orden y progreso como pilares fundamentales en los procesos de independencia y rectores de la filosofía positivista presentes en la estructuración de las repúblicas latinoamericanas.

El concepto de libertad se enmarca en el límite de la acción de otros y el interés pro comunal, bajo este argumento se legitiman las políticas centralistas de la Regeneración como la de restringir el amplio comercio de armas y municiones o la restricción de la libertad de prensa

en pro de garantizar el orden público al evitar desórdenes y excesos regionales o personales; ya que, aduce que la libertad absoluta contiene necesariamente la libertad del mal, al ser así reglamentada, se le resta al poder público el derecho o el deber de sancionar, de esta manera, cuando existe libertad legal le debe corresponder mayor compromiso moral, para que cada individuo sea responsable del mal que haga; ya que, “Nadie es libre para el mal, nadie es irresponsable por el mal que haga. Quien hace el mal, aun cuando no tenga responsabilidad ante los tribunales, la tiene ante Dios, ante la sociedad, ante su propia conciencia” (Valderrama, 1990, p. 27), esta libertad moral es la que asocia M. Caro a la unidad nacional debido a que la responsabilidad social inicia con el individuo, que no solo debe acatar la ley temporal porque no todo lo que está dentro de la libertad legal es lícito, esta no puede negar la ley natural. Así, expresa que:

Han pensado muchos, o hacen como si creyesen, que la libertad moral es la libertad legal; que todo lo que la ley permite o tolera es lícito; error especialmente conexionado con la negación utilitaria de la ley natural, con la denegación impía de la religión positiva, y aun sustentando como tesis jurídica por abogados radicales, en el “pleito de la peseta de papel” (Valderrama, 1990, p. 27).

El Catolicismo para Caro se va a convertir en el freno moral de la sociedad, pero, a la vez, su punto de unión y de armonía; ya que, de él proviene la justicia y sobretodo la verdad. Tanto justicia como verdad se imparten a través de la Iglesia que tiene la legitimidad de hacerlo gracias al poder que Jesucristo depositó en los Apóstoles de santificar a los hombres, salvar almas y enseñar. Por esto, (Caro, 1869), entiende que de la Iglesia se desprende el poder definir,

por inspiración divina, cuestiones en el orden moral y religioso, tiene definiciones dogmáticas que la filosofía no puede resolver.

En este sentido, para M. Caro (Valderrama, 1990), el desmontar y resistir el proyecto liberal se convierte, como él mismo expresa, en una lucha entre el bien y el mal, este último representado en la desarticulación de la sociedad por causa del federalismo, de la libertad o legalidad de la rebelión por el concepto de libertad absoluta, en el que, para él, se encuentra también la libertad de hacer u optar por el mal en el fundamento utilitario y sobre todo, el cuestionamiento hacia la autoridad y principios rectores de la Iglesia Católica, cuestión última que deja a los liberales de la época en pecado permanente.

No obstante, para M. Caro (Valderrama, 1990), hay cuestiones como la decisión sobre la mejor forma de gobierno, en las que la Iglesia no es rectora, pues, de esta depende el grado de moralidad, legitimidad y catolicidad de los pueblos; aunque, así, considera que de los principios morales-religiosos se nutre la teoría política y los asuntos públicos. En cuanto a régimen político, el católico puede ser republicano o preferir la monarquía en el orden civil “porque la Iglesia no ha definido en esa materia” (Valderrama, 1990, p. 41)

En el análisis que hace M. Caro (1869), sobre las características de Colombia, determina la no pertinencia de una monarquía por las características y costumbres del país; aunque resalta la conveniencia de un gobierno fuerte en razón del momento histórico y por el nivel de moralidad existente. Según el análisis histórico realizado por este pensador político y con influencia del Tradicionalismo, después de un periodo de desorden solo se llega a la armonía por medio de la dictadura o por influencia de una inteligencia superior para enseñar a obedecer a todos los que quieren gobernar; esto, como argumento en contra de los Estados Unidos de Colombia cuyo régimen tilda de promover la anarquía y la insubordinación.

Por ende, en un momento en el que la autoridad central estaba fuertemente debilitada M. Caro defiende los gobiernos fuertes o centralismo para que pongan freno al desorden público o para que cohesionen desde una misma fuente de autoridad a toda la población, por tal razón los considera como regímenes necesarios de los que no se debe prescindir; debido a que, en momentos de perturbación tienen una función providencial. En este sentido, para Miguel Antonio Caro es imprescindible fundar la autoridad del gobierno, lo ve como un movimiento histórico necesario resultante de los periodos inmediatamente anteriores y a la vez como acto faltante luego de la independencia. Así la Constitución de 1886, fue “votada para poner término a la anarquía y establecer la paz religiosa y la paz social, armonizando todos los intereses legítimos”. (Valderrama, 1991, p. 67)

Por esta razón, la función del Estado es darle unidad y sentido a la nación, si bien reconoce la tradición católica en la sociedad colombiana, debido a la influencia y a la enseñanza utilitarista que tomó auge en los gobiernos liberales con la secularización de la educación, encuentra que la misión del gobierno es volver a encausar a la población, no con el propósito de mantener el control político o social, ni para mejorar la economía o modernizar el país, sino para encontrar el camino de la reconciliación con Dios, hecho esto, se superarían como efecto secundario, los problemas políticos, económicos y sociales.

Miguel Antonio Caro, aparte de pensar un gobierno fuerte como resultado histórico, también lo propone como compensación ante la debilidad del país en términos económicos, políticos, sociales y morales. En estas condiciones, solo un gobierno fuerte garantiza la seguridad y la paz como escenarios necesarios para pensar en extender la educación, fomentar la industria, organizar los gremios, etc... En la estructuración del Estado colombiano considera “como la primera necesidad del país la aclimatación del orden, y como primer deber del legislador y el

magistrado estudiar y prevenir las causas de trastornos” (Valderrama, 1991, p. 17), bajo esta premisa, la constitución de 1886 trata de encontrar su firmeza en la religión, en la concordia de la Iglesia y el Estado, en la enseñanza cristiana; además, en la unidad legislativa, en un gobierno con facultades, en la moralización de la prensa que redunde en garantizar la honra de los individuos, el orden social y la tranquilidad pública.

La unidad administrativa de la nación, por ende, es una necesidad imperante para constituir un gobierno fuerte. La centralización de la nación es afirmada en la Carta Constitucional de 1886; documento en el que, en su primer artículo establece que la nación se reconstruye en una República Unitaria, y en el segundo, define que su soberanía es esencial y reside en esta (en la nación), de allí emanan los poderes públicos; en palabras de Miguel Antonio Caro “la proclamación de la soberanía nacional es la primera muestra de la resurrección de este cuerpo político que se llama Patria. Ya no hay república diseminada; ya no hay soberanos coexistentes; La Nación es una, y una es la Autoridad” (Academia Colombiana de Historia, 1983, p. 1545).

De esta manera, junto a la unidad administrativa se defiende la unidad territorial del país, Caro (Academia Colombiana de Historia, 1983) afirma que el concepto de Estado es sinónimo de Nación, los Estados son soberanos y la soberanía recae únicamente en la Nación; por tanto, determina una impropiedad del lenguaje al seguir denominando Estados a las partes del país; ya que, hay un sometimiento a la autoridad directa de la administración central, así, la unidad territorial se establece en el artículo cuarto de la Constitución de 1886 al cambiar la denominación de los Estados a departamentos de la República de Colombia; con esto, se termina y deslegitima la división territorial en Estados autónomos del periodo del Radicalismo Liberal.

Además de estas medidas incluidas dentro de la Constitución de 1886, el proyecto de la Regeneración desde la presidencia de Carlos Holguín y durante la vicepresidencia y presidencia de Miguel Antonio Caro, usan en nombre del principio de Autoridad, de la centralización administrativa, de la cohesión moral y del orden público, el artículo 121 que aprobó la declaración del estado de sitio solo con la sanción de los ministros (de libre nombramiento del presidente) y las disposiciones transitorias, sobre todo de los artículos K y L. Se sancionaron una serie de actos legislativos, leyes y decretos transitorios que le daban facultades extraordinarias al presidente, so pretexto de mantener el orden público. Dentro de estas normas se encuentran principalmente, a saber: la Ley 61 de 1888, conocida como la “Ley de los Caballos”, el Decreto 151 de 1888, la Ley 90 de 1888 y la Ley 65 de 1888.

Por un lado, el Artículo K facultó al gobierno para prevenir y reprimir los abusos de la prensa hasta que se expidiera la Ley de imprenta. Por el otro lado, el Artículo L legitimó los actos legislativos expedidos por el presidente antes de sancionada la constitución “aunque sean contrarios a ella, mientras no sean expresamente derogados por el Cuerpo Legislativo o revocados por el Gobierno” (Constitución de la República de Colombia 1886), estos artículos permitieron el ejercicio del ejecutivo por fuera de los principios establecidos en la Constitución.

Con la Ley 61 de 1888, según su texto, se buscó prevenir las ideas subversivas y las tentativas revolucionaras que pudieran alterar el orden público, dándole al gobierno poder de castigar la sospecha e imponer penas, facultándole para mantener un fuerte control político y social; junto a esta potestad la creación de la Policía Nacional bajo la Ley 90 de 1888, en la que se distribuye por comisarias el territorio bajo la dirección de una División Central y una División de Seguridad; esta última, encargada de descubrir y limitar tentativas insurreccionales, así como expresa Aguilera, la División de Seguridad se encargó “de actividades de *supervigilancia*

especializada (política) y de costumbres permitió incluir en la estrategia de seguridad consideraciones morales y religiosas en la vigilancia, prevención y control social” (Aguilera, citado Múnera, 2011, p. 248)

Estas leyes generaron presión en los sectores de oposición no solo liberales sino también conservadores teniendo en cuenta la división de estos últimos entre históricos (oposición) y nacionalistas. Carlos Albán (citado Múnera, 2011), líder de los conservadores históricos, conocido opositor de los gobiernos de Carlos Holguín y Miguel Antonio Caro, en el año 1982 en el gobierno del primero, fue perseguido por motivos políticos, llegando al punto de allanar su morada, la de familiares y amigos hasta ser aprehendido bajo el amparo de la “Ley de los Caballos”. Para Albán si bien la Ley 61

(...) autorizó al presidente para prevenir y reprimir *administrativamente* los delitos y las culpas que afecten el orden público, no lo autorizó para proceder dictatorialmente. Vivo está el artículo 26 de la Constitución que dice: «Nadie podrá ser juzgado si no conforme a las leyes preexistentes, ante el tribunal competente y observando la plenitud de las fórmulas *propias de cada juicio*» (...). Así pues, La ley 61 solo puede dar competencia administrativa al presidente para prevenir y reprimir, pero nunca pudo eximirlo de juzgar según las fórmulas esenciales que protegen todo derecho, entre las cuales, la primera es no condenar sin oír (Albán, citado Múnera, 2011, p. 257).

La Ley 51 de 1888 también se convirtió en una forma de persecución política y control de la sociedad. Limitó la libertad de expresión creando delitos y culpas contra particulares y contra la sociedad, le permitió al ejecutivo tomar decisiones judiciales en estos casos. Los delitos de prensa se tipificaron en lo que se concebía como ataque a las leyes, a la dignidad civil y

eclesiástica, a la institución militar, a la incitación a desórdenes, a combatir la legítima organización de la propiedad e incitar el enfrentamiento entre clases socioeconómicas. Estas disposiciones orientadas, como afirma Alejandro Pajón (en Múnera, 2011) bajo ideas de orden social y orden religioso.

De 1890 a 1900 el gobierno suspendió y multó poco más de 40 periódicos, o al menos esas son las cifras oficiales, aunque falta realizar un estudio que permita conocer qué otros periódicos fueron sancionados y perseguidos. Las sanciones que estipularon las leyes y decretos fueron básicamente suspender el periódico entre tres y seis meses, dependiendo de la falta, y se multaba al redactor del artículo o al director del periódico; en la mayoría de casos era el director quien enfrentaba la pena pues hacía las veces también de redactor de gran parte de los escritos. (Pérez, 2014, p. 32)

Dentro de estas sanciones se suspendieron periódicos como El Liberal, El Espectador y El Zancudo, entre otros; así mismo, algunos editores y escritores como César Conto y Nicolás Esguerra fueron exiliados mientras que otros como Fidel Cano Gutiérrez, fueron llevados a prisión. Estos excesos por parte del gobierno fueron cuestionados, no solo por quienes lo sufrieron sino también en el seno del Partido Nacional, Alejandro Pajón tomando como soporte el artículo “Amigos y Enemigos del Gobierno” publicado en La Nueva Época y en El Taller en 1888, expone cómo los jóvenes del partido rechazan la censura y la limitación de la libertad de expresión al afectarse la base de la construcción de la opinión pública, resaltan la no aceptación de la infalibilidad del poder civil, exhortan a éste a obrar según las instituciones y los deseos de los gobernados en el marco de la legitimidad y la justicia.

Estas medidas, sumadas a un descontento de diferentes grupos sociales, propiciaron diferentes levantamientos en el gobierno de Miguel Antonio Caro. En 1892 es elegido vicepresidente, en la reelección de Núñez y, fue encargado del poder ejecutivo debido a los problemas de salud del presidente electo, quedando a cargo tras su fallecimiento.

Dentro de este marco político, en 1893 y 1894, se producen diferentes levantamientos que buscaron la reivindicación de los artesanos como sujetos populares, la autonomía en la defensa de los derechos republicanos, se critica el aumento de los costos de vida. También se protesta contra el gobierno de Caro, pidiendo la derogatoria de los artículos transitorios de la constitución, la limitación de las facultades extraordinarias del presidente, se reprueba el establecimiento del cuerpo de policía en Bogotá y el control que se ejercía en la vida social limitando el libre tránsito, el funcionamiento de las chicherías, la restricción a la prostitución, el destierro de los menores habitantes de calle, la vigilancia a sectores populares considerados focos de delincuencia, la presión política y el abuso de autoridad. Además denunciaban la postergación de medidas económicas en defensa de la producción nacional y la inflación producto del papel moneda de curso forzoso y las emisiones clandestinas (Múnera, 2011), además se exige la libertad de prensa y de imprenta, la organización de un sistema electoral libre y con garantías, la separación de poderes y la supresión de los monopolios estatales. A partir de estos acontecimientos, los liberales además de reconocer como legítimas las razones de los levantamientos, condenan sus consecuencias. Liberales como Rafael Uribe Uribe (Ocampo, 1984) cuestionó el uso de fuerza, denunció fusilamientos ilegales, opositores llevados a prisión y a los destierros como el del doctor Santiago Pérez.

En 1898, Uribe Uribe califica de forma negativa el gobierno de Miguel Antonio Caro, dentro de los cuestionamientos que hace de los últimos seis años, indica que no fue un gobierno

de paz, en él, el ejercicio del poder público se redujo al círculo cercano del mandatario, se espió a la prensa, el trato que dio a la oposición, en sus palabras, fue como de “bestias feroces; encarnación del *Leviatan* de Hobbes” (Ocampo, 1984, p. 55), negó los derechos individuales “el señor Caro fusiló, encarceló, persiguió y empobreció a sinnúmero de colombianos inocentes; y fue, en suma, por singular atavismo” (Ocampo, 1984, p. 56).

Desde la política económica, la creación del papel moneda y el Banco Nacional que fueron medidas tomadas para la fortalecer la centralización, también generaron resistencia en la sociedad de la época. El primero fue visto como un tipo de impuesto y no como un medio para el manejo comercial con relación a la moneda y forma de activar las exportaciones, en los gobiernos conservadores se manejó con prudencia en tiempos de paz, “usado con moderación, el papel moneda fortalecía el gobierno y lo liberaba de una excesiva dependencia de los ingresos aduaneros y los empréstitos nacionales y extranjeros” (Bergquist, 1999, p.72), en las guerras y en particular en la Guerra de Los Mil Días, las cuales presionaron a los gobiernos para hacer grandes emisiones de papel moneda.

Por su parte, la Revolución de 1895, fue un levantamiento de los liberales contra el gobierno de M. Caro. Estos levantamientos fueron reprimidos por vía militar, el primero por el general Antonio Basilio Cuervo y el segundo por el general Rafael Reyes, destacando la importancia del uso de la fuerza como forma necesaria para implementar un ideal de sociedad.

Las críticas a la Regeneración emergen fundamentalmente por las tendencias positivistas-utilitaristas adoptadas por el partido liberal que llevaron a percibir lo religioso como rezago en el desarrollo, un estado que debía ser superado en aras del progreso centrado en los procesos de industrialización y de desarrollo científico, dicho progreso, entendido desde el Positivismo como la tendencia necesaria de la humanidad a renovarse y a llegar a estados más altos de civilización,

donde se disipe la guerra, exista mayor homogeneidad en los criterios fundamentales y se llegue a la armonía en las condiciones de existencia humana. Esta tendencia y ante la resistencia o la oposición del partido conservador, desencadenó en la práctica política el afán de secularizar la sociedad colombiana para llevarla al progreso adoptando medidas como la eliminación del fuero eclesiástico, la separación de la Iglesia de los asuntos políticos y educativos y la desamortización de sus bienes.

Además esta postura liberal ataca los principales postulados tradicionalistas, conservadores y religiosos; principalmente el de autoridad como derecho divino, hereditario y de obediencia en contraste con la legitimación de la autoridad como producto de la cooperación o como el resultado de un pacto entre partes en búsqueda del principio de mayor felicidad.

Los gobiernos conservadores son fuertemente criticados por los liberales no solo en Colombia. Spencer (2007), al analizar la orientación conservadora considera que ésta se fundamenta en las lógicas bélicas y militares, características de los Regímenes de Estado Antiguos, donde la cooperación es obligatoria y los hombres son reclutados, obedecen órdenes por coerción o bajo pena de muerte; este régimen emerge y se ajusta a la guerra constante, para Spencer propios de los distritos rurales, poblados por jefes militares y sus subordinados, que mantenían las ideas y tradiciones primitivas. En este orden de ideas, para este liberal, la tendencia conservadora va a asumir dentro de la organización política al monarca como el delegado del cielo, al cual, los ciudadanos están sujetos de forma incondicional y siguiendo la definición de que hace Bolingbroke, lo conservador se centra en el derecho divino y hereditario, en la obediencia pasiva, el voto negativo, el papismo, etc.

En contraste, la orientación liberal se fundamenta en un régimen de contrato, donde la cooperación es voluntaria, los productores o distribuidores reciben recompensa por servicios

especificados y pueden abandonar la organización a voluntad. Este tipo de régimen va a surgir en las ciudades formadas por trabajadores y comerciantes, que, por sus propias prácticas mantienen lógicas de cooperación.

El liberalismo emerge en la oposición a los regímenes absolutistas, ya que, conciben que la sujeción de los ciudadanos al gobierno es condicional, proviene del mantenimiento de un pacto entre las partes, se resaltan las ideas de soberanía popular, contrato original, independencia parlamentaria, resistencia, abdicación, entre otras, y actúan como principios liberales, que además se pueden reconocer como lo opuesto a lo conservador.

El pensamiento liberal proclama la libertad de conciencia, la representación de las mayorías, los procesos de secularización y disminución de las restricciones económicas con miras a disminuir la cooperación obligatoria y aumentar la cooperación voluntaria “el liberalismo representaba la libertad individual contra el Estado coercitivo” (Spencer, 2007, p.25).

En este sentido, la Constitución de 1886 y los gobiernos regeneradores fueron cuestionados, inicialmente por la forma como se sancionó y luego por la aplicación de sus artículos y las disposiciones transitorias. En palabras de Rafael Uribe Uribe la Carta Constitucional fue votada

(...) en una sola pieza por un consejo restringido, nombrado por el gobierno, y que funcionó bajo puerta cerrada, bajo la presión de las bayonetas; de suerte que fue una Constitución expedida de arriba para abajo, a la manera que los reyes absolutos otorgaban a sus súbditos cartas de libertad, graciosamente o por su solo beneplácito (Ocampo, 1984, p. 21)

En este sentido, los cuestionamientos a la Carta Constitucional responden a la ausencia de la idea de soberanía popular o a su malversación, es decir, si bien los delegatarios

comprendían a los representantes de los Estados que componían en su momento al país, la idea de participación se desvirtuó por el tipo de nombramientos y la presión del Partido Nacional.

No obstante, para Uribe Uribe (Ocampo, 1984) en 1896, declara que en el caso de un triunfo liberal, por medio de la guerra, el punto de partida de la organización de la República debería ser la Constitución de 1886, ya que restablecer la federación exagerada en 1863, hubiera sido retroceder a pesar de lo cuestionable de su origen. Así mismo, los beneficios que pudiere tener la Constitución en esa época, diez años después de su proclamación aun no eran puestos a prueba en el ejercicio total de sus artículos debido a las facultades omnímodas presentes en las disposiciones extraordinarias y transitorias que facultaban al ejecutivo a tomar decisiones por encima de los artículos constitucionales, por lo cual Uribe Uribe expresa:

(...) De aquí que el país ignore hasta hoy si muchas de las disposiciones de dicha Constitución son en realidad buenas o malas, pues son ellas las que menos han regido durante esta década, sino el régimen arbitrario de las facultades omnímodas [...] como instrumento de la más ruda opresión de que jamás comunidad política alguna haya sido víctima; sin embargo de eso, deseo sinceramente que, si la paz continua, la normalidad constitucional se establezca plenamente, para que si la Constitución es buena como a despecho de todo lo afirman algunos, su bondad se resalte, y si no para verificar en ella la máxima inglesa; *la ley mala, ejecutarla, para que su maldad se patentice y la reforma se imponga.* (Ocampo, 1984, p. 22)

La aceptación de la Constitución, a la que llamó Uribe Uribe a sus copartidarios, fue orientada hacia la necesidad de verificar el alcance de la Constitución en su aplicación y la

oposición a las normas que le daban facultades extraordinarias al ejecutivo, ya que, con estas se anularon los principios que rigen una república.

Los cuestionamientos de los liberales, en cabeza de Rafael Uribe Uribe, se orientaron hacia la implementación del estado de sitio, la falta de garantías en los procesos judiciales para los opositores del gobierno, la represión a la prensa y el uso excesivo de la fuerza. En lo económico se acusó de la implantación de una dictadura fiscal con la celebración de contratos irregulares a conveniencia del gobierno, altos impuestos en contra vía del libre comercio, emisiones sin tasa del papel moneda y escasa inversión en vías de comunicación. A nivel social se cuestionó la extensión y la calidad de la educación y la limitación en los derechos individuales (Ocampo, 1984).

Rafael Uribe Uribe, explica como una razón fundamental de los problemas del gobierno de Caro, el poder sin límites ni responsabilidades que derivó en desvíos y actos de locura. En esas faltas de límite, encuentra la falta de moralidad, acusa a Caro de ejercer una política de engaños “para él, como para los escobares y los sofistas que lo defendieron, jurar un gobernante sobre los santos evangelios que cumplirá la Constitución y la ley, significa unas veces que lo jura y no que efectivamente lo cumplirá, y otras que no queda obligado ni a lo uno ni a lo otro” (Ocampo, 1984, p. 57).

No obstante a los planteamientos y críticas liberales, M. Caro a lo largo de su vida como pensador y periodista defendió la idea del centralismo y de autoridad que promovió en la Constitución de 1886 y ejerció en su gobierno; lo anterior, debido a que encontraba en el centralismo la solución a las flaquezas del país y la naturaleza de la nación colombiana. De esta manera, se opuso al federalismo por no surgir espontáneamente sino por ser, para él, una copia de Estados Unidos, los Estados de Colombia se crearon pensando en implantar el federalismo,

más el federalismo no surgió de la existencia de Estados que lo sustentaran, como ocurrió en el caso de los Estados Unidos; afirmó entonces que el modo como se introdujo este sistema, de 1855 a 1858, revela que aquello no fue una unión, sino despedazamiento imprudente y forzado, en este sentido, expresa que:

El 27 de febrero de 1855 se creó el Estado de Panamá, el 11 de junio del 56, el de Antioquia; el 15 de junio de 57, los del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena. No se procedía por agregación como en los Estados Unidos, sino por disgregación (Valderrama, 1990, p. 359)

Pero la crítica que realiza Miguel Antonio Caro a los gobiernos radicales no se limitó a la implantación del federalismo sino a la separación del poder temporal y el poder espiritual que pronto concebiría, más allá de la disociación entre la Iglesia y el Estado como la persecución del catolicismo que en sus planteamientos el liberal va a ser por naturaleza anticatólico, para él

El liberalismo es el protestantismo aplicado al orden político: el liberal es el que protesta contra la Iglesia en nombre de la sociedad política, como protestante el que protesta contra la Iglesia en nombre de la razón y del libre examen. El liberal puede ser monárquico y puede ser republicano, y profesar opiniones diversas a puntos ajenos a los intereses de la Iglesia; pero no puede dejar de estar reñido con el catolicismo. El liberal más moderado y tolerante rechaza el Syllabus (Valderrama, 1990, p. 329)

Bajo esta perspectiva, Miguel Antonio Caro critica los postulados utilitaristas promovidos por los liberales de la época, cuestiona el concepto de placer como rector de la conducta humana, ya que cree que individualiza a los hombres, les da un carácter egoísta, al

centrarse la búsqueda del placer propio, además de quedarse en el estado de infancia o ignorancia sin posibilidad de trascender al verdadero propósito de la existencia.

La lucha anticatólica del liberalismo es también vista por M. Caro como una forma de mantener al liberalismo unido, como un chivo expiatorio contra el cual hay que defenderse, argumenta que esta estrategia surge debido a la debilidad de los principios rectores liberales, por la imposibilidad de sustentar el concepto de igualdad en una sociedad con profundas diferencias entre ricos y pobres o entre capitalistas y proletarios y el de libertad entre intereses encontrados.

Por esta razón M. Caro recibe las críticas que les hacen a los católicos y al partido conservador referentes al interés por volver a la colonia o a un imperio clerical; para conservar sus privilegios políticos y económicos, como de ignorantes debido a que no es del interés del interés católico o conservador volver al sistema colonial que no es conveniente, pero también interpela frente a los procesos de expropiación de bienes y expatriación de religiosos aduciendo que la desigualdad es necesaria para mantener el equilibrio entre la sociedad sin ella no habría orden ni progreso, siguiendo a Juan Bautista Toro (Valderrama, 1990), debe existir la coexistencia entre ricos y pobres y esto no debe por sí mismo ser motivo de luchas entre las sociedades, ya que esta es limitada por el desprecio a las riquezas que recomienda el Evangelio, donde el rico no debe ser avaro y el pobre no debe ser codicioso, la pobreza existe para que el necesitado busque oficio para su sustento y la riqueza para que el rico provea al pobre en el ejercicio de su oficio (Valderrama, 1990). En este sentido, M. Caro por causa de las expropiaciones va a expresar que

(...) no se diga que el exceso de sus rentas -a sueldos-, quita el pan a los hambrientos; porque de este modo no se les conjura dar, sino a restituir, que es cosa diferente, y en tesis general inexacta. Porque si él roba o defrauda está

obligado a restitución, sin lo cual no se perdona el pecado, no todos los ricos son ladrones o detentadores, y el que recibe salario por sus servicios le asigna y paga el Estado, o el tasado rendimiento de sus propiedades, deben dar limosna según los beneficios que reporten; pero no por el mero hecho de tener una renta le quitan el pan a nadie, ni están obligados a restitución de ningún género (Valderrama, 1990, p. 240)

Si bien la Iglesia no predica el progreso material, indica M. Caro (1869), predica el progreso moral, de él emerge el progreso intelectual y por el que surge el progreso material como consecuencia natural, pero cuando a este último se subordina el primero se engendra la corrupción y el materialismo que son algunos de los causantes de las luchas entre los seres humanos.

Siguiendo las directrices del Papa Pio IX, consignadas en la Encíclica *Quanta Cura* y *Syllabus*, M. Caro (Valderrama, 1990), condena a los liberales como apostatas en el marco del ateísmo internacional al afirmar que son el error más grande de las nuevas sociedades; aspectos que le permitieron llegar a la conclusión de que “Cristo reina hoy sobre las almas buenas pero no sobre el mundo” (Valderrama, 1990, p. 88), al cuestionar los principios religiosos, los principios políticos que de ellos emanan, son percibidos como tiránicos y autoritarios, ya que, el orden sin religión se traduce en violencia, mientras que orden y religión componen la verdadera libertad, la libertad cristiana, por esta razón expresa que los liberales

(...) quieren que guardemos nuestra religión en el santuario de la conciencia para que no fertilice a la sociedad, y que proclamemos nuestros severos principios políticos desnudos de toda razón religiosa, para que por su

apariencia austera, destituidos de lo que los hace amables y ligeros, aparezcan tiránicos y nos desacrediten (Valderrama, 1990, p. 83)

Para M. Caro, las críticas hacia la propuesta de los gobiernos católicos, sobrepasa el tema político, acusa a los liberales de querer iniciar una guerra religiosa, confirma el apoyo de los católicos en caso de que la nación sea atacada por enemigos externos o si internamente se ve amenazada por la anarquía; pero, ratifica que los católicos no apoyarán la iniquidad contra Cristo y fundamenta su posición con las directrices del Papa Paulo IX que postula cómo el error de las sociedades modernas a la confianza exacerbada hacia la sabiduría humana se convierte en vanidad y de allí surgen los errores en los principios políticos; además, incluye cómo orientar a la sociedad hacia la sola satisfacción de placeres y búsqueda de comodidades o alentar la idea de que la enseñanza cristiana es enemiga del progreso y de la civilización, situación que termina en el sometimiento de la Suprema Autoridad a la potestad civil.

Conclusiones

El conflicto político del siglo XIX en Colombia tuvo como vehículos los partidos políticos a partir de la mitad del siglo. En la búsqueda de la mejor forma de gobierno, liberales y conservadores enfrentaron dos formas de entender la sociedad y en este sentido, dos formas de organización del Estado Nación. Inicialmente los principios ideológicos de cada uno, desde lo político, lo económico y lo social, unido a las características geográficas, las educativas y a la multiculturalidad (no reconocida) de la población, ocasionaron que se negaran entre sí, imposibilitando mediaciones o acuerdos que permitieran la cohesión de la sociedad en un proyecto común.

Desde lo económico, los intereses de los grandes comerciantes configuraron un bloque librecambista que pugnó con los intereses de los artesanos y la naciente industria, los cuales solicitaban al gobierno la protección de sus actividades comerciales. En la organización política el enfrentamiento se desarrolló entre federalistas y centralistas y en la idea de la separación o la unión del Estado y la Iglesia, poniendo en el centro la discusión, el origen y la distribución de la autoridad y la verdad. Desde el ámbito social los principios de igualdad, libertad, bien, orden y progreso se acondicionaron a los objetivos de cada proyecto político en el marco de las propuestas filosóficas adoptadas por liberales y conservadores.

A grandes rasgos se puede afirmar que, por un lado, los liberales defendieron el librecombio, el federalismo, la separación de lo político y lo religioso, la igualdad y la libertad en un significado amplio, el orden y el progreso desde una visión economicista e industrial. Por otro lado, los conservadores adoptaron el proteccionismo, la unión de lo espiritual y lo temporal, la igualdad y la libertad dentro de unos marcos específicos religiosos, el orden y el progreso en

razón de la conservación de la ley natural y el camino hacia la salvación de los pueblos desde los postulados de la Iglesia Católica.

Las propuestas políticas de los partidos parten de dos orientaciones filosóficas distintas; una de ellas, la de los liberales, quienes adoptaron el Positivismo-Utilitarismo; y la otra, la de los conservadores, quienes tomaron el camino del Tradicionalismo. A partir de estas orientaciones filosóficas, ambos partidos encontraron el horizonte y la justificación de su ejercicio político, enfrentándose así en los principios fundamentales desde la esencia y sentido de las sociedades hasta el análisis y estructuración del Estado Nación colombiano.

El Positivismo y el Tradicionalismo se oponen en principio en la concepción del desarrollo de la humanidad. El primero, se inicia en el estado teológico y metafísico, en los cuales las fuerzas sobrenaturales y las abstracciones brindan las explicaciones de la existencia humana; pero afirma que la verdadera evolución se hace al comprender la imposibilidad de encontrar las causas primeras y buscar hechos generales en los fenómenos particulares, es decir, del paso de un estadio teológico y metafísico a uno fundamentado por la razón en el que la humanidad tiene la capacidad de crear y transformar su realidad a partir de la ciencia, la industria y la idea de progreso. Por el contrario, el Tradicionalismo niega la capacidad creadora de la humanidad y afirma que su evolución o desarrollo pleno se encuentra, no en el progreso sino en el orden, esto es, en la armonización de las sociedades con el orden natural, con las leyes naturales que son anteriores a los individuos; de esta manera, la plenitud de los hombres se ajusta en la correspondencia de sus acciones con el fin que está dispuesto en el plan de Dios.

Desde esta contraposición fundamental se despliega la irreconciliable orientación política de los liberales y conservadores al entender de forma disímil el objetivo de la sociedad, la interpretación que hacen de las características y de la mejor forma de gobierno para Colombia, se

encausan en dos proyectos que se alejaron cada vez más con el paso de los años. Los liberales que pretendían separarse del significado y de las estructuras coloniales tomaron el camino de lo que se denomina como una mirada hacia el futuro, un *no ser todavía*; aceptaron como momento fundacional del Estado Nación colombiano el proceso de independencia con el que intentaron clausurar el pasado colonial desde su legado cultural hasta las instituciones políticas y económicas en los que se sustentaba. Por esta razón, se atacó el sistema esclavista, a la Iglesia como rectora de la vida política y social, se impulsó una economía de libre cambio e industrializada y enfáticamente se cuestionó el principio de autoridad basado en concepciones religiosas para dar inicio a un orden estructurado a partir de la idea de libertad, igualdad, progreso, de confianza en la razón humana y en la posibilidad creadora de la humanidad; lo anterior, en un camino hacia la evolución pero alejado de un destino ineluctable.

Los conservadores a partir de una perspectiva cultural, basaron su proyecto filosófico político en los rasgos específicos de la nación colombiana, por consiguiente, tanto José Eusebio Caro al dar origen al partido y Miguel Antonio Caro años más tarde, al fundamentar la Regeneración Conservadora, erigen como características propias de la nación el legado hispánico, esto es, la lengua y la religión; por lo cual, el proceso de independencia, visto desde esta perspectiva, no lleva a una ruptura o a un momento fundacional que repudie todo lo anterior, sino que busca modificar la estructura de la forma de gobierno para adaptarla a los requerimientos de la nación sin modificar su esencia.

De esta manera, se evidencia cómo el Tradicionalismo aportó a los gobiernos regeneradores, como el de M. Caro, el sustento ideológico que les permitió implementar gobiernos en el que los medios de coerción fueron herramientas frecuentes en el ejercicio del poder, siguiendo la máxima tradicionalista que afirma que los gobiernos deben tener los medios

necesarios para el cumplimiento de sus objetivos en el marco del respeto a las leyes y a la subordinación de la población a la autoridad, de esta manera, el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones sociales, las opiniones contrarias al gobierno o a el partido se evidenciaron en las represiones armadas, en la persecución política y en la limitación de la libertad de expresión.

Así, el ejercicio del poder desde la formulación sujeta a los principios del Tradicionalismo, permite la concentración del poder, lo cual se evidencia en la Constitución de 1886 y en sus artículos transitorios, en donde se otorgó facultades extraordinarias al ejecutivo, permitiendo al presidente mantener leyes o decretos por fuera de los marcos constitucionales y la asignación de penas judiciales, haciendo evidente la injerencia del presidente en procesos legislativos y judiciales.

También es importante tener en cuenta, que la concentración del poder en el ejecutivo y el uso de la fuerza, se justificó en la idea tradicionalista que asegura que cuando el alma humana o la sociedad que se guía por la malicie y los vicios solo puede volver a encausarse por medio de las guerras o de la fuerza para eliminar lo enfermo de la sociedad, y permitir que surja la su grandeza.

Otro principio de legitimación de los gobiernos fuertes se fundamentó en la idea del Estado como educador, es decir, con la función de perfeccionar al hombre. En el ejercicio político de Caro, esta función de educar implicó erradicar las ideas positivistas utilitaristas, que concibió como contrarias a la esencia y al sentido de la nación colombiana, por lo cual apoyó de forma vehemente la educación religiosa en manos de la Iglesia católica, erigió al catolicismo como la religión de la nación colombiana y promovió el control de la libertad de culto.

Esta idea de Caro, sobre la sociedad colombiana como tradicional y mayoritariamente católica, se vio cuestionada por diferentes sectores que abogaban por el mantenimiento de la

libertad de culto, la educación laica y la separación del Estado-Iglesia, lineamientos establecidos en las Constituciones liberales; para él, esta postura no era el producto natural de la sociedad sino el resultado de la corrupción que engendró la mala enseñanza o la enseñanza de doctrinas paganas que confundieron a la sociedad, es decir, la educación laica con influencia del Positivismo-Utilitarismo; por tanto, la misión del Estado, de la sociedad y de las familias es corregir estos yerros; la misión del Estado es la de educar para convertir a las almas extraviadas hacia lo bueno, hacia la salvación, esto es, a rendir culto a Jesucristo y seguir las leyes naturales.

En consecuencia, el Estado Nación impulsado por Miguel Antonio Caro se cimienta en el reconocimiento de los principios religiosos como fundamentos políticos, reconoce el origen de la Autoridad en lo divino, es decir en Dios como origen de todo poder y toda verdad y afirma la imposibilidad de pretender la guía de dos conciencias, es decir, que los individuos puedan ser en su vida privada religiosos y en la pública laicos o viceversa. Con estas dos máximas tradicionalistas, fundamenta la veracidad y la necesidad de armonizar el orden temporal con el espiritual; ya que, en términos teóricos y desde el análisis histórico de Colombia, encuentra irreconciliable la idea de un gobierno laico con una sociedad tradicionalmente católica.

Este proyecto, fundamentado por Miguel Antonio Caro se planteó como repuesta a un periodo histórico anterior, el del Liberalismo Radical, la estructuración de su pensamiento político se desarrolló en el marco de un conflicto político que iba más allá de la discrepancia ideológica; se centró en la eliminación del otro, del ejercicio político marcado por la exclusión; por tanto, la idea de identidad nacional colombiana, en el pensamiento político de M. Caro, se centró en la defensa de la Iglesia como principio de verdad y autoridad, en el que tienen origen la teoría política, el desarrollo moral de la sociedad y la salvación de la misma.

De acuerdo a los principios de la filosofía política tradicionalista y la caracterización de la nación colombiana que hace M. Caro, explicada anteriormente, se entiende su concepción del Estado Nación como un mecanismo para religar a la sociedad y para fortalecer los principios morales. En donde, la idea de la unificación nacional, al igual que la construcción de la identidad nacional colombiana, fue un proyecto estatal, creado y dirigido por las instituciones públicas, en la que se recurrió, por un lado, a la unificación administrativa a través de la centralización del poder en el ejecutivo, la creación de un ejército nacional, la unificación económica con la creación del Banco Nacional y el establecimiento de una moneda única, por otro lado, a la unificación sociocultural en la que se enlaza el pasado hispánico, la tradición religiosa católica.

La mejor forma de gobierno para Caro, depende de la nación, teóricamente no es necesario o conveniente establecer un régimen político aplicable por sí mismo a cualquier sociedad, pero sí centra toda su atención en el problema de una estructura particular que promueva la ley natural y la aceptación de la infalibilidad pontificia a través de los lineamientos de la Iglesia para promover la virtud individual y colectiva en Colombia, por lo cual, instituye como el objetivo del Estado Nación y de sus gobiernos el garantizar la salvación de los pueblos a través del fomento de la virtud y la enseñanza cristiana. Desde los principios políticos afirma la subordinación de los gobiernos al orden espiritual, ya que en este, la autoridad temporal encuentra su límite. En cuanto al trabajo legislativo, ratifica como los tradicionalistas que las leyes positivas emergen de las leyes naturales y que en tanto ciudadanos y funcionarios públicos sean cristianos justas serán las naciones y los gobiernos.

La discusión de Caro no es entorno a cómo aplicar la democracia o cómo respetar el libre albedrío, se encamina hacia cómo eliminar el mal en una sociedad viciada por el Utilitarismo, por tal motivo, en su ejercicio de poder como vicepresidente y presidente de la República, en

consonancia con la filosofía tradicionalista, legitimó el uso de las facultades omnímodas, la represión por la fuerza de las manifestaciones sociales y la deslegitimación de los discursos opositores con el adjetivo de ateos, apostatas, entre otros.

La estructuración del Estado Nación colombiano, en los primeros años de la Regeneración Conservadora, estableció la educación en manos de la Iglesia para mantener y fundamentar las tradiciones y así coordinar las memorias individuales y colectivas en torno a la moral católica. De igual manera, la creación del Himno nacional en 1887 fue una construcción simbólica que se convirtió en un pilar fundamental para crear una memoria común. Así, el proyecto de la Regeneración, del cual hizo parte M. Caro, no solo buscó un orden político sino también estructurar una idiosincrasia particular que lo legitimara, recurriendo a la emblemática y a una historia común que estableciera la memoria nacional; este acontecimiento se enmarca en lo que se denomina memoria *selectiva*, *inscriptiva* y *elitista*; ya que hace un recuento lineal de la historia de la nación y el pasado hispánico para legitimar el poder y las instituciones.

La idea de Estado Nación desde el pensamiento de Miguel Antonio Caro a finales del siglo XIX, se desarrolló en el contexto de una confrontación política en la que los partidos no fueron el mecanismo de participación ciudadana sino que se convirtieron en dos bandos en guerra enfrentados por el poder. Esta situación le permitió justificar el uso fuerza o el autoritarismo para mantener el orden público e intentar implementar su ideal de sociedad lo que conllevó a las prácticas de exclusión y persecución política las cuales no permitieron la consolidación de los procesos de construcción de identidad o de estructuración de una nación que tuvieran como referente un proyecto común o una memoria colectiva que redundara en la cohesión de la población. Lo que se instauró en la memoria colectiva fue el uso de la violencia y las adhesiones sectarias a los partidos políticos, de esta manera, se vio como los dos partidos

sufrieron fracturas cuando ejercieron el poder, de tal manera que en el Radicalismo Liberal los disidentes permitieron la creación del Partido Nacional que sacó del poder a los liberales y en la Regeneración Conservadora, el partido conservador se dividió en nacionalistas e históricos.

M. Caro en sus disertaciones no menciona el problema de la multiculturalidad o del respeto de otras cosmovisiones, sino la necesidad de terminar con el paganismo, por lo cual, su proyecto de Estado Nación no contempla a grupos indígenas, afrodescendientes y demás individuos que no profesasen el catolicismo en su vida privada y pública, sencillamente fueron deslegitimados de acuerdo a lo ordenado por la Iglesia, y descritos como personas en pecado, ignorantes o apostatas.

Finalmente, se evidencia que el pensamiento y el ejercicio político de Caro es semejante a una cruzada, su función es la de reestablecer el control cristiano en la nación colombiana y para esto necesitó la estructuración de una Carta Constitucional que lo legitimara y una posterior negación de la misma a partir de las facultades extraordinarias que permitiera, por la fuerza, la implementación de aquel propósito.

El proyecto Regenerador y las ideas de Miguel Antonio Caro, en el contexto político anteriormente mencionado, se circunscribieron a contener a los liberales, a los sectores de oposición que se concentraron en la pugna por el control de aparato estatal, por lo cual, lo que se hace evidente en la aplicación de la idea de Estado Nación de éste pensador, es el ejercicio del poder en un “estado de guerra” o en un momento en el que la sociedad estaba viciada, las circunstancias políticas no permiten dilucidar claramente cómo el Estado Nación promovería la evolución de los individuos que les permitiera el estado de libertad y de uso del libre albedrío promovido por el Tradicionalismo y la Iglesia, por fuera de la justificación del uso de la fuerza. Siguiendo la crítica que hizo Rafael Uribe Uribe, respecto a que la Constitución de 1886 no se

podía validar en su aplicación, ya que se había gobernado bajo las leyes de excepción (refiriéndose a los gobiernos de Holguín y de M. Caro), se puede afirmar también, que por las características de la confrontación partidista de la época, el proyecto de Estado Nación de M. Caro no logró su implementación completa y por esto se imposibilita su validación de los postulados teóricos a través del ejercicio del poder en tiempos de paz o en una lucha partidista menos destructiva que llevara a dilucidar los efectos positivos o negativos de la idea de Estado Nación desde el pensamiento de Miguel Antonio Caro.

Referencias Bibliográficas

Academia Colombiana de Historia (1983), Antecedentes de la constitución de Colombia de 1886. Bogotá. Plaza & Janes.

Achugar, H (comp) (1998). La fundación por la palabra: letra y nación en América Latina en el siglo XIX, Uruguay, Universidad de la República.

Anderson, B. (1993). Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Fondo de cultura económica, México.

Aljure, S. (Comp.) (1981) Escritos Histórico Políticos de José Eusebio Caro. Vo 12. Bogotá. Ediciones Fondo Cultural Cafetero.

Asamblea Nacional Constituyente (1886). Constitución política de Colombia. Recuperada de: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7153>

Balmes, L. (1939). Antología de sus escritos Políticos. Madrid. Espasa-Calpe.

Balmes, L. (1976). El Criterio. México. Aguilar Editores.

Beorlegui, C. (2006). Historia del pensamiento filosófico latinoamericano: una búsqueda incesante de la identidad. Bilbao. Universidad de Deusto.

Bergquist, C. (1999). Café y Conflicto en Colombia (1886-1910): La Guerra de los Mil Días sus antecedentes y consecuencias. Bogotá. El Áncora Editores.

Bravo, A. (2000) La invención de la Nación. Lecturas de la Identidad de Herder a Homi Bhabha Buenos Aires Manantial.

Bushnell, D. (1996) Colombia: una nación a pesar de sí misma. Bogotá, Planeta.

Bustamante, D. (1974) Efectos económicos del papel moneda durante la Regeneración, en cuadernos colombianos, No 4, Bogotá.

- Canal, M., Sanin, J. (1986) Colombia, los símbolos Patrios, Cali, Departamento de Relaciones Publicas de Esso Colombiana S.A.
- Caro, M. (1951) Estudios constitucionales, Bogotá, Ed. Iqueima.
- Caro, M. (1869) Estudio sobre el Utilitarismo, Bogotá, impresión F. Mantilla.
- Caro, M. (1993) Obra selecta/ Miguel Antonio Caro, Caracas, Biblioteca de Ayacucho.
- Chamorro, G. (2004) Reflexiones sobre el Positivismo en América Latina (México .Argentina S.XIX), en revista PORIK AN, Universidad del Cauca, Colombia. Recuperado de: http://www.unicauca.edu.co/porik_an/imagenes_3noanteriores/No.9porikan/porikan_13.pdf
- Chevalier, F. (1979). América Latina, de la independencia a nuestros días. Barcelona. Editorial Labor.
- Colom, F. (2005). Relatos de Nación: la construcción de las identidades nacionales en el mundo hispánico. Madrid, Vervuert.
- Comte, A (1979). La Filosofía Positiva. México. Editorial Porrúa.
- Gaos, J. (1980) En torno a la filosofía mexicana, México, Alianza Editorial Mexicana.
- García, N. (1997) Culturas Híbridas y estrategias comunicacionales. México, Colima.
- Gillis, J. (1996) Memoria e identidad: La historia de una relación, en Commemorations. The politics of National Identity Press. Princeton University Press.
- González, G., Fernán, E. (1977) Partidos políticos y poder eclesiástico, Bogotá, CINEP.
- Gutiérrez, V. (2005). Familia y cultura en Colombia, Colombia, Universidad de Antioquia.
- Iriarte, A. (2005) Historias en contravía. Bogotá, Intermedio Editores.
- Jaramillo, J. (2001) El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Colombia, Ediciones Uniandes.
- Maistre, J. (1955) Consideraciones sobre Francia. Madrid. Ediciones Rialp S.A.
- Melo, J. (1998) La Constitución de 1886, en Nueva Historia de Colombia, Vol 2, Bogotá, Planeta.

- Nieto, M. (1924) Recuerdos de la Regeneración. Bogotá. Casa Editorial Marconi.
- Melo, J. (1989) La Constitución de 1886, en Nueva Historia de Colombia. Bogotá. Editorial Planeta. Vol III.
- Mill, J. (1984). El Utilitarismo: un sistema de lógica. Madrid. Alianza Editorial.
- Múnera, L. Cruz, E. (Ed.) (2011) La Regeneración revisitada: Pluriverso y hegemonía en la construcción de Estado-nación en Colombia, Colombia, La Carreta Editores E. U.
- Múgica, L. (1988) Tradición y Revolución: Filosofía y sociedad en el pensamiento de Louis de Bonald. Ediciones Universidad de Navarra.
- Núñez, R., Sindici, O. (1887). Himno nacional de Colombia. Recuperado de: <http://www.colombia-sa.com/simbolos/himno.html>
- Ocampo, J. (Comp.) (1984) Rafael Uribe Uribe: Escritos Políticos. Bogotá, El Áncora Editores.
- Palacios, M. (2003) Entre la legitimidad y la violencia. Bogotá, Norma.
- Palacios, M., Safford, F. (2004) Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. Bogotá, Norma.
- Pérez, S. (2014) Tinta roja: el periodismo liberal en Bogotá, Bogotá, recuperado de: <file:///C:/Users/TICO/Downloads/8558-39127-1-PB.pdf>
- Renán, E (1882). ¿Qué es una Nación?, conferencia dictada en la Sorbona. Paris.
- Restrepo, J. (1885) La Iglesia y el Estado en Colombia, Londres, publicado por Emiliano Isaza.
- Roig, A. (1993) Historia de las ideas, Teoría del discurso y pensamiento Latinoamericano, Bogotá, USTA.
- Soler, R. (1978) La Nación Hispanoamericana. Panamá. Colección Cultura.
- Spencer, H. (2007). El Hombre Contra el Estado. Medellín. Editorial Grafoprint.
- Tirado, A. (1998) El Estado y la política en el siglo XIX, en Nueva Historia de Colombia, Vol 2, Bogotá, Planeta.

Valderrama, C. (Comp.) (1990). Escritos Políticos Miguel Antonio Caro: primera serie. Bogotá. Instituto Caro y Cuervo.

Valderrama, C. (Comp.) (1990). Escritos Políticos Miguel Antonio Caro: segunda serie. Bogotá. Instituto Caro y Cuervo.

Valderrama, C. (Comp.) (1991). Escritos Políticos Miguel Antonio Caro: tercera serie. Bogotá. Instituto Caro y Cuervo.

Valderrama, C. (Comp.) (1993). Escritos Políticos Miguel Antonio Caro: cuarta serie. Bogotá. Instituto Caro y Cuervo.

Uribe, R. (1985) La Regeneración Conservadora de Núñez y Caro, Bogotá, Instituto para el desarrollo de la democracia Luis Antonio Galán.

Zalamea, A. (Dr.) (1989) Antología del pensamiento Colombiano. Colombia. Zalamea Fajardo Editores.

Zea, L. (1972) América como conciencia. México, UNAM.